



Procuración del Tesoro de la Nación

**INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN. FORMULA MANIFESTACIÓN
PRELIMINAR FUNDAMENTA RECURSO. MANTIENE CUESTIÓN FEDERAL**

Señor Juez:

Mayra Rafaela COSENTINO, abogada, inscripta al T° 131 F° 854 C.P.A.C.F., letrada apoderada del **ESTADO NACIONAL (SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO)**, con el patrocinio letrado de Sebastián Javier AMERIO, Procurador del Tesoro de la Nación designado por Decreto N° 143/26, Santiago M. CASTRO VIDELA, Subprocurador del Tesoro de la Nación, designado por Decreto N° 143/2026 y Julio PABLO COMADIRA, Subprocurador del Tesoro de la Nación, designado por Decreto N° 106/2025, manteniendo el domicilio constituido en la I.E.J 27-33934977-6, en autos caratulados: **“CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/ ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL S/ ACCION DECLARATIVA”** (Expediente N° CNT 10.308/2026), a V.E. respetuosamente decimos:

-I-

OBJETO

Venimos en legal tiempo y forma a interponer recurso de apelación contra la resolución del 30/03/2026 que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora, notificada mediante cédula electrónica en la misma fecha, por causar a esta parte un gravamen actual, concreto y de imposible reparación ulterior.

Asimismo, en tanto el 06/04/2026 se dictó una nueva resolución de oficio – íntegramente vinculada con la medida cautelar cuestionada–, efectuaremos algunas consideraciones que reflejan lo prematuro de la decisión aquí cuestionada.

Finalmente, fundamos el presente recurso, solicitando su concesión y oportuna elevación al Superior.

-II-

PRELIMINAR: LA DECISIÓN DE FECHA 06/04/2026 REFLEJA LA

CONTRADICCIÓN INSALVABLE DEL *A QUO* EN RELACIÓN CON LA FALTA DE ANÁLISIS PARA OTORGAR LA MEDIDA CAUTELAR A LA ACTORA.

2.1. La sentencia del 06/04/2026. El juez dio marcha atrás con su propia decisión y restableció la vigencia del artículo 55 de la Ley N° 27.802.

Con carácter previo a expresar los agravios de nuestra representada, resulta oportuno señalar que el 06/04/2026 el juez de grado dictó una resolución por la cual dispuso: “*Revocar por contrario imperio la medida cautelar innovativa dispuesta en relación con el art. 55 de la Ley 27.802, en la causa interpuesta por la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CGT RA), contra el ESTADO NACIONAL – PODER EJECUTIVO NACIONAL -PEN.*”

Para justificar su decisión, el juez de grado sostuvo que realizó un nuevo análisis de la cuestión porque “*Un estudio de campo realizado en la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina, dio por resultado que la medida cautelar perjudica a los sujetos de preferente tutela constitucional en aquellas jurisdicciones cuya doctrina legal establece sistemas de actualización de deuda con impacto menor que la establecida en el art. 55 de la ley 27.802*” (énfasis agregado).

Luego agregó que “*Me refiero a las provincias de Buenos Aires (según el criterio de los Tribunales), Chubut, Chaco, San Luis, Córdoba (en juicios anteriores al año 2024), Jujuy, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Mendoza y Tucumán (en juicios más antiguos). Posiblemente haya más jurisdicciones con esta realidad, pero este muestreo es suficiente para determinar que una medida de carácter universal como la cautelar dictada, puede no resultar favorable para algunos trabajadores y trabajadoras en cuyo interés se dictó la resolución.*”

A partir de esta resolución, el *a quo* decidió mantener la suspensión de los artículos dispuesta en su sentencia cautelar del 30/03/2026, con excepción del artículo 55 de la Ley N° 27.802 que dispone:

“*Artículo 55.- En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios:*

a) *A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva*

determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente;

b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual;

c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo.

Las disposiciones del presente artículo son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor, así como también después de la declaración de quiebra.”

2.2 La evidente necesidad de un análisis más profundo de las cuestiones planteadas por la actora dan cuenta de lo prematuro de la decisión cautelar adoptada.

El motivo invocado por el juez de grado para revocar su propia medida cautelar –la elaboración de un análisis más profundo de la cuestión– da cuenta la premura y ligereza con que fue adoptada la medida.

Note, V.E., lo que está ocurriendo: el juez de grado dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del artículo 55 de la Ley N° 27.802 (y todos los restantes artículo de la LML suspendidos), mediante una sentencia que nada dijo sobre la forma en que su aplicación podría generar perjuicios irreparables (ni una sola mención). Sin embargo, luego descubrió que, finalmente, el perjuicio de la aplicación de la norma sólo podría definirse en el caso concreto.

Cabe preguntarse, entonces, ¿qué ocurre con los restantes artículos incluidos en la medida cautelar sobre los cuales tampoco se explicitaron los motivos de su suspensión?

En tal sentido, así como la suspensión de artículo 55 de la Ley N° 27.802 habría requerido un análisis y una comprobación del estado de situación en diferentes jurisdicciones, **queda en evidencia que la suspensión de las restantes normas también necesita del mismo análisis o, incluso, de uno más riguroso dependiendo de su complejidad.**

Esta falta de análisis por parte del *a quo* se comprueba con mayor claridad al advertir

la cantidad de normas que fueron suspendidas de manera casi inmediata a partir de la simple suposición de que podrían ser perjudiciales para el “sujeto tutelado”, pero sin fundamentos de que este daño pudiera llegar a existir.

Una decisión de tal magnitud –suspensión cautelar de 48 artículos de una ley sancionada por el Congreso de la Nación– resulta inconcebible por su amplitud y por la generalidad de sus efectos, pero además porque el análisis de la pretensión de la actora requiere, sin dudas, mayor amplitud de debate.

2.3. La palmaria ausencia de caso. El control de constitucionalidad.

Por otro lado, la afirmación de que la medida cautelar “...perjudica a los sujetos de preferente tutela constitucional en aquellas jurisdicciones cuya doctrina legal establece sistemas de actualización de deuda con impacto menor que la establecida en el art. 55 de la ley 27.802...” constituye –nada más y nada menos–, que **el reconocimiento por parte del a quo de que no existe un caso judicial en la pretensión colectiva de la actora.**

Al respecto, cabe recordar que la finalidad de este artículo responde a la necesidad de establecer criterios claros y precisos para la determinación de los intereses en los procesos judiciales que al momento no poseían norma alguna que los regule y, tal como reconoció el a quo, esta norma resulta beneficiosa en aquellos casos donde la actualización sea menor. No obstante, si así no lo fuera, quien se ve perjudicado podría impugnar la validez de la norma y pedir que no se aplique a su caso concreto.

Esto fue manifestado por esta parte en oportunidad de producir el informe del artículo 4 ° de la Ley N° 26.854 y se reitera en la presente apelación: **no existe perjuicio acreditado por la actora, sino que, los perjuicios que la vigencia de la norma, eventualmente, pueda producir deben ser acreditados en cada caso concreto por quienes son titulares del derecho afectado.**

Como se dijo, la CGT impugnó 48 artículos de una ley del Congreso Nacional sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado a ella como organización. Ahora bien, el juez de grado admite –respecto del art. 55 de la Ley 27.802– que los actos de aplicación de la norma van a ser individuales, concretos y, dependiendo el caso, puede generar o no un perjuicio.

Lo mismo ocurre con los diferentes artículos cuya suspensión se ordenó de forma cautelar, pues cada uno de ellos será perjudicial, o no, para el sujeto tutelado en la medida que

cada uno lo acredite en el caso particular.

Por último, no es menor señalar la conducta errante del juez de grado quien, en tiempo récord, adoptó una medida cautelar que suspendió una gran cantidad de artículos de una ley emanada del Congreso de la Nación sin un análisis de los daños irreparables que la norma impugnada podría generar.

Luego, **también en tiempo récord y además de oficio**, modificó su criterio en base a un nuevo análisis realizado a partir de un porque advirtió que la resolución de las cuestiones atinentes a un artículo específico puede diferir de un “estudio de campo realizado en la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina”, **el cual no citó ni referenció de ninguna manera.**

A su vez, en la misma resolución menciona que “...cada jurisdicción juzgará la pertinencia de la aplicación de los artículos 54 y 55 de la ley 27.802 a los juicios en trámite”, pero solo revoca la medida respecto del artículo 55 de la Ley. Es decir, nuevamente se muestra otro yerro producto de la falta de reflexión.

Por todos estos motivos y por los que exponemos a continuación, corresponde que V.E. revoque la medida cautelar dictada por el *a quo*. Con costas.

-III-

FUNDA RECURSO

3.1. PRIMER AGRAVIO: MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR TRIBUNAL INCOMPETENTE.

En primer lugar, se agravia mi representada porque la resolución apelada omitió considerar adecuadamente el planteo de inhibitoria oportunamente formulado por esta parte (ver a fs. 152/202) y que tramita actualmente ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo contencioso Administrativo Federal N° 12, en las actuaciones caratuladas “EN SECRETARIA DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL C/ Y OTROS S/ INHIBITORIA”, Expte. CAF N°12.002/2026.

Si bien la resolución apelada mencionó la existencia del planteo de inhibitoria, lo cierto es que se limitó a constatar su trámite sin atender las consecuencias jurídicas que de ella se derivan. En particular, prescindió de considerar que la existencia de un conflicto de competencia impone un criterio de prudencia jurisdiccional que veda el dictado de una medida

cautelar como la aquí dispuesta.

Además, omitió considerar que la pretensión articulada por la actora se dirige contra el Estado Nacional, lo que torna inapropiada la intervención del fuero laboral. Lo que, sin perjuicio de la inhibitoria, debió llevar a la declaración de incompetencia de oficio.

En este marco, el pronunciamiento recurrido vulnera el principio del juez natural, en tanto ejerce jurisdicción en un ámbito cuya competencia ha sido expresamente cuestionada.

Cabe agregar que, la Justicia Nacional del Trabajo, carece de competencia en razón de la materia y la persona, toda vez que mediante la acción impetrada se pretende impugnar una ley dictada por el Congreso de la Nación, en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Nacional.

En el caso, la competencia es del fuero federal (por estar demandada la Nación y por abarcar más allá de la jurisdicción de la Ciudad la decisión pretendida, excediendo a los jueces locales), sumado a que –previo a decidir la competencia– estaba expresamente asignada al fuero Contencioso Administrativo Federal. En tal sentido, el propio artículo 20 de la Ley N° 18.345 establece que cuando es demandada la Nación –o en otros supuestos también abarcados por autos–, la competencia es del Contencioso Administrativo Federal.

Ello no se ve alterado por la suspensión ahora dictada por el *a quo*. Resulta cuestionable que dictara una medida sobre una materia que de forma expresa quedaba fuera de su competencia (ergo, fallo a sabiendas que contravenía una norma expresa). Además, reconocer la norma implica que –a sabiendas– suspendió aquella para arrogarse una competencia que el legislador no le otorgó. Así, de forma arbitraria e infundada eliminó la norma que el legislador previó para asignar competencia, arrogandosela para sí (contraviniendo al legislador), lo que implica que declaró suspendida la norma de competencia al solo efecto de poder declararse “competente”, lo que implica una violación a la garantía del juez natural y al debido proceso.

Cabe recordar que la competencia posee raigambre constitucional, es de orden público y, como tal, imperativa, inderogable, irrenunciable e indisponible; privativa; excluyente e inalterable.

Desde antaño, la jurisprudencia del Alto Tribunal señala que la competencia en razón de la materia es improrrogable por su propia naturaleza y no puede ser alterada por los litigantes (Fallos: 122:408, 132:230), toda vez que las leyes sobre jurisdicción y competencia son de orden público y no depende de la voluntad de las partes su aplicación (Fallos: 14:280;

151:324).

En esa línea y sin perjuicio de lo anterior, la CSJN ha sostenido –en múltiples oportunidades– que cuando resulta demandado el EN, los tribunales competentes son los juzgados contenciosos administrativos federales (Fallos: 332:1738; 326:3118).

En efecto, el Estado Nacional cuenta con la prerrogativa de litigar ante la jurisdicción federal, conforme lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Nacional, la cual no puede ser desconocida ni desplazada por la intervención de tribunales ordinarios.

En este sentido, la Corte Suprema ha sido clara al establecer que la Justicia Nacional del Trabajo no reviste carácter federal, por lo que no puede satisfacer la prerrogativa constitucional del Estado Nacional de litigar ante dicho fuero. Así lo ha sostenido en los precedentes “Corrales” (Fallos: 338:1517), “Nisman” (Fallos: 339:1342) y “Sapienza” (Fallos: 340:103), en los que descartó la equiparación entre tribunales nacionales ordinarios y federales a los fines de dirimir cuestiones de competencia, destacando el carácter meramente transitorio de la justicia nacional ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Más recientemente, en el precedente “Levinas” (Fallos: 347:2286), el Máximo Tribunal reiteró dicho criterio, reafirmando la distinción entre la justicia nacional ordinaria y la justicia federal, y consolidando la doctrina según la cual no corresponde asimilar a los tribunales nacionales con los federales a los fines de determinar la competencia.

En igual sentido, la Corte Suprema ha sostenido que, cuando el Estado Nacional es parte en el proceso, resulta determinante su derecho a litigar en el fuero federal, correspondiendo asignar la competencia al fuero contencioso administrativo federal en atención a la naturaleza pública de la relación jurídica sustancial. Así lo resolvió en el precedente “Rizzo” (Fallos: 345:1219), donde destacó que el Estado Nacional es titular de la relación jurídica sustancial y, en tal carácter, goza de la prerrogativa de acceder a la jurisdicción federal.

Por lo demás, la alteración de la competencia legalmente establecida implica una afectación directa al derecho al juez natural y al debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en tanto importa sustraer el conocimiento de la causa al tribunal previamente determinado por la ley.

De admitirse lo resuelto, se arribaría al inadmisibles resultado de que un tribunal ordinario intervenga en el control de legalidad y constitucionalidad de normas emanadas

del Estado Nacional, con evidente afectación al orden federal establecido por la Constitución. Máxime cuando, en el caso, el tribunal local pretende darle un alcance colectivo nacional a la medida de suspensión de una ley del Congreso, afectando la vigencia de dicha norma en las restantes jurisdicciones.

Por lo que de lo expuesto cabe concluir que: (i) la competencia *ratione materiae* fue incorrectamente ponderada por el sentenciante y (ii) para el caso en el que la hubiera considerado conforme a derecho, no lo hizo respecto de la competencia *ratione personae*.

En razón de lo anterior, basta este agravio para que se revoque la sentencia impugnada, al inaplicar la reiterada doctrina jurisprudencial ya señalada, la cual es de carácter vinculante conforme fuera sostenido por la CSJN al decir "*los precedentes deben ser mantenidos por esta Corte Suprema y respetados por los tribunales de grado, por una importante y evidente razón de seguridad jurídica*" (Fallos: 340:257). Y enfatizó esta afirmación al sostener que "*es deseable y conveniente que los pronunciamientos de esta Corte sean debidamente considerados y consecuentemente seguidos en los casos ulteriores, a fin de preservar la seguridad jurídica que resulta de dar una guía clara para la conducta de los individuos*"; [...] *debiendo existir causas suficientemente graves como para hacer ineludible tal cambio de criterio* (Fallos: 248:115; 329:759; 337:47)". (Fallos: 340:257).

3.2. SEGUNDO AGRAVIO: LA ILEGÍTIMA SUSPENSIÓN CON CARÁCTER COLECTIVO DE UNA LEY DEL CONGRESO POR SOSPECHA INMOTIVADA DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Es dable destacar que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye un acto de gran gravedad institucional (Fallos: 300:1087; 301:962; 312:1681; 317:44; 322:1349; 323:2409), dada la presunción de legitimidad que gozan las leyes debidamente sancionadas y promulgadas (Fallos: 314:424; 319:1524; 319:1529) (Bianchi, A. B., "*Control de constitucionalidad*"; t. I, 2ª ed. actualizada, pág. 271).

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Federal sostiene que la declaración de inconstitucionalidad, al desconocer los efectos de una norma dictada por un órgano igualmente supremo, constituye un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 249:51; 260:153; 288:325; 307:531; 314:424; 324:920; 328:91; 344:3006; 348:1698, entre muchos otros), sumado a ello que la misión más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin

menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar (Fallos: 155:248; 272:231; 311:2553; 328:3573; 338:488, entre muchos otros).

En suma, la revisión judicial de este tipo es la función más delicada que puede asumir un tribunal, por lo que la declaración de inconstitucionalidad sólo está justificada cuando es absolutamente ineludible.

Así, sólo cabe declarar la inconstitucionalidad de un precepto de rango legal cuando un examen exhaustivo conduce a la conclusión cierta de que su aplicación al caso concreto vulnera el derecho o garantía constitucional invocado (Fallos: 314:923), y no cuando la impugnación se limita a una alegación genérica o escueta (Fallos: 316:1718; 322:842) (conf. Bianchi; *ob. cit.*, pág. 272).

Ahora bien, la posibilidad de suspensión cautelar en un proceso colectivo con pretenseo alcance nacional, de una norma del Congreso, no es una cuestión novedosa en la jurisprudencia del Máximo Tribunal. En el caso “Thomas” (Fallos: 333:1023), la Corte fue determinante al señalar que “...no es válida la posibilidad de suspender o incluso derogar una norma legal con efectos erga omnes, lo que sin duda no se ajusta al art. 116 de la Constitución Nacional...por lo cual se arribaría, como se dijo, al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado sino que, incluso, podrían no compartirla” (cons. 7°).

Allí, también recordó que “...el a quo debió haber considerado que una cautelar que suspende la vigencia de toda la Ley... con efectos erga omnes tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes y el modelo de control de constitucionalidad” (cons. 8°). Luego de explicar los modelos de control de constitucionalidad, concluyó que “**no existe ningún modelo impuro en el mundo que combine los modelos puros en forma que la competencia para hacer caer erga omnes la vigencia de la norma se disperse en todos los jueces, simplemente porque la dispersión de una potestad contra legislativa de semejante magnitud es inimaginable, dado que abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes**” (ibidem, énfasis agregado).

Respecto del modelo nacional, detalló que “el modelo argentino es claramente el difuso o norteamericano en forma pura. En una acción como la precedente, **ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860. Si no la tiene en la sentencia**

que decide el fondo de la cuestión a fortiori menos aún puede ejercerla cautelarmente” (ibidem; énfasis agregado). En este punto resulta trascendental la conclusión de la Corte Suprema –plenamente aplicable al caso que nos reúne–, al señalar que *“la suspensión cautelar de la vigencia de una norma dispuesta por un tribunal presupone que éste se atribuye la competencia para sentenciar en definitiva con idéntico poder. Dado que ese poder no lo confiere la Constitución Nacional a ningún juez ni tribunal de la Nación, alterando gravemente el modelo de control constitucional de las leyes por ella consagrado, es claro que el caso reviste de gravedad institucional suficiente como para que esta Corte abra la instancia a efectos de asegurar la vigencia del sistema consagrado en las normas de máxima jerarquía, corrigiendo una deformación que introduciría el caos en la vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación lesionando para siempre el ejercicio de los poderes constitucionales”* (ibidem).

Sin embargo, a sabiendas de lo recientemente expuesto y pese a la gravedad institucional involucrada, el *a quo* asumió la competencia en una causa en la que precisamente se cuestiona la validez de una norma de alcance general, avanzando incluso en el dictado de una medida cautelar de efectos expansivos..

Nótese que sin tapujo alguno, en el considerando I.5. pretende que su sentencia se aplique a todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina –donde además deja en evidencia que no diferencia correctamente entre intereses individuales, cuándo estos son homogéneos y menos los distingue de los bienes colectivos–.

Es de notar en este sentido que el *a quo* omitió considerar la existencia de un caso y, también, del límite a la jurisdicción y del control de constitucionalidad, que fuera oportunamente planteado por esta parte en el informe del artículo 4 de la Ley N° 26.854.

Es decir que el Juez conocía los límites a su jurisdicción al momento de dictar la cautelar aquí cuestionada. Fue expresamente señalado el precedente citado y absolutamente omitido por el *a quo*. Insistimos, no existe una potestad en ningún Juez para dictar una cautelar con alcance expansivo semejante como para suspender una ley del Congreso con carácter nacional, anulando por completo la actividad legislativa y dejando en riesgo toda Ley y el andamiaje institucional entero.

En suma, todo lo hasta aquí expuesto evidencia que ningún Juez de la república tiene competencia para dictar una cautelar que suspenda los efectos de una ley del Congreso con alcance nacional, en una potestad contra legislativa que anula directamente la competencia y

actos del Congreso. El hecho en sí reviste de una gravedad institucional que pone en riesgo todas las normas de la república y es por ello que la decisión impugnada deberá ser revocada por V.E..

3.3. TERCER AGRAVIO: INEXISTENCIA DE CASO, CAUSA O CONTROVERSIA QUE HABILITE LA PRESENTE ACCIÓN.

Antes de ingresar al examen de los requisitos de procedencia de la medida cautelar, corresponde señalar que la acción declarativa de inconstitucionalidad incoada adolece de un defecto de admisibilidad que, a su vez, compromete la procedencia de la cautelar solicitada.

En este orden, agravia al Estado Nacional que en la sentencia haya tenido por configurado un “estado de incertidumbre” suficiente para habilitar la acción declarativa intentada por la Confederación actora, pues tal conclusión prescinde de los requisitos exigidos por el artículo 116 de la Constitución Nacional y 2° de la Ley N° 27.

La jurisprudencia de la Corte Suprema exige además: (i) un conflicto actual; (ii) una afectación concreta y (iii) una relación jurídica determinada. Extremos que no se verifican ni en autos ni en la sentencia atacada.

Sin embargo, conforme se expuso en oportunidad de producir el informe previsto por el artículo 4° Ley 26.854: (i) no existe acto concreto de aplicación; (ii) no se acreditó la afectación directa y (iii) los perjuicios invocados son hipotéticos y abstractos.

Es decir que, pese a las disconformidades de la actora con la reforma normativa, la mera vigencia de una ley no configura, por sí sola, un caso judicial.

La sentencia presume la existencia de un conflicto, pero además admite que se trata de una acción de carácter abstracto. Esto transforma indebidamente al Poder Judicial en un órgano consultivo, lo que resulta incompatible con el sistema constitucional argentino. Con el agravante que, además y como se señaló en el agravio precedente, se pretende hacer un control de constitucionalidad erga omnes en el planteo abstracto.

Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido de manera consistente que la acción declarativa del artículo 322 del CPCCN debe responder a un caso concreto y no puede tener carácter simplemente consultivo o importar una indagación meramente especulativa.

En congruencia con el artículo 116 de la Constitución Nacional y recogiendo esa consolidada jurisprudencia, el legislador estableció de modo expreso en el Título I de la Ley N° 26.854 que el caso, causa o controversia es un presupuesto habilitante para el despacho de una medida cautelar en sede judicial, cualquiera sea su contenido o continente. La ausencia de una causa o caso contencioso cancela, *ab initio*, el ejercicio de la jurisdicción asegurativa por parte del tribunal.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha aplicado directamente estos criterios para rechazar *in limine* una acción declarativa de inconstitucionalidad por inexistencia de caso, al verificar que el planteo era meramente consultivo, desprovisto de la concreción e inmediatez necesaria y procuraba la declaración meramente general y abstracta de la inconstitucionalidad de la norma impugnada (CNCont. Adm. Fed., Sala II “CPACF c/ EN – PEN - Ley 26.854 s/ Proceso de Conocimiento”, 23/12/2013).

La analogía con el caso de autos es directa: **la CGT impugnó más de cincuenta artículos de una ley del Congreso Nacional sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado a ella como organización, a otros sindicatos o a los trabajadores que dice representar.**

Esta circunstancia no es neutral respecto de la pretensión cautelar: si la acción principal carece del requisito de caso concreto, la pretensión cautelar queda privada de su presupuesto lógico: no puede hacerse lugar a una medida cautelar sin que exista una situación de hecho actual cuya alteración deba prevenirse. La vigencia de la ley, por sí sola, no constituye el perjuicio actual que la acción declarativa exige para ser procedente.

Admitir lo contrario implicaría convalidar un control judicial abstracto, ajeno a nuestro sistema constitucional, desnaturalizando los límites de la función jurisdiccional y habilitando una indebida intervención del Poder Judicial en esferas propias de los otros poderes del Estado.

En consecuencia, al no configurarse un caso, causa o controversia en los términos constitucionales exigidos, la resolución apelada carece de uno de sus presupuestos esenciales de validez, por lo que corresponde su revocación, lo que así se exora que decrete V.E.

3.4. CUARTO AGRAVIO: AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y COLECTIVA DE LA ACTORA PARA LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 27.802.

En otro orden, causa agravio a los intereses de mi representada que la resolución reconozca legitimación a la actora sin verificarse antes los recaudos exigidos para las acciones colectivas.

En particular, en la sentencia impugnada no surge acreditada la representación suficiente; no se delimitó el colectivo afectado; no se demostró homogeneidad y no se justificó la imposibilidad de acciones individuales.

Conforme se expuso en el informe oportunamente presentado por esta parte, la CGT no representa directamente a los trabajadores y no demuestra afectación concreta.

Así, el pretorio recurrido incurre en un grave error al confundir representación sindical, con legitimación procesal colectiva.

En este punto, corresponde desvirtuar expresamente el argumento introducido por el *a quo* para sostener la legitimación de la actora, basado en una supuesta contradicción en la conducta del Estado Nacional.

Expresa en tal sentido el sentenciante: *“La demandada cuestionó en su contestación esa representación. Cito textual ‘La CGT no ostenta una representación directa e inmediata de los trabajadores individuales, sino de las entidades de primer o de segundo grado afiliadas a ella’ ‘A ello se suma que no todos los trabajadores registrados se encuentran afiliados a organizaciones sindicales. Menos aún están afiliados los trabajadores no registrados, a quienes la ley atacada pretende brindar herramientas para que puedan insertarse en el marco legal de protección. Asimismo, no todos los sindicatos integran federaciones, ni todas las federaciones forman parte de la CGT. Por consiguiente, la legitimación invocada resulta meramente dogmática y carente de sustento fáctico concreto’.* Sin embargo, esta representación del colectivo, que emana del art. 31, inciso a) de la ley 23.551, ha sido reconocida por el Estado Nacional en la presentación titulada *‘Solicitan se inscriba en el registro de juicios colectivos’* efectuada en la causa *‘CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ EN s/AMPARO LEY16.986’* (Expte. N.º CAF 010258/2026), que tramita ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal, que tengo ante mi por consulta pública en scw.pjn.gov.ar. No puede negar aquí lo que peticiona allí (que se lo tenga por

actor colectivo), porque es una argumentación inadmisibile. Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior (C.S.J.N., Fallos 275:235, 275:458, 294:200, cons 6º, 294:220, 300:480, 307:1602), máxime al ser dicho comportamiento deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.”

En efecto, el juzgador afirma que esta parte habría reconocido la representación colectiva de la CGT en el marco de otra causa en trámite ante la Justicia Contencioso Administrativo Federal, al solicitar la inscripción del proceso en el Registro Público de Procesos Colectivos, concluyendo a partir de ello que no podría desconocer en la especie dicha legitimación.

Tal razonamiento resulta manifiestamente erróneo. Explicamos el porqué.

En primer lugar, se trata de procesos distintos, con objetos diferentes y alcances propios, por lo que no puede derivarse de aquella actuación una supuesta contradicción que releve al tribunal de efectuar el análisis específico de los recaudos de procedencia de la acción colectiva en las presentes actuaciones. Incluso, aquella presentación no se encuentra agregada en autos, por lo que no conforma parte de la causa ni de sus antecedentes.

A su vez, la eventual solicitud de inscripción en el Registro de Procesos Colectivos en otra causa no importa un reconocimiento de la legitimación sustancial de la actora en este proceso.

En segundo lugar, porque la inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos constituye un acto de naturaleza meramente procesal y ordenatoria, orientado a evitar la superposición de litigios y garantizar la adecuada administración de justicia, **pero en modo alguno ello implica un pronunciamiento sobre la concurrencia de los requisitos de legitimación colectiva.**

Incluso, y sin perjuicio de que aquella presentación es ajena a este proceso, **de sus términos jamás se extrae que el Estado Nacional le reconozca aptitud procesal alguna a la CGT.** A ello siquiera se llega de una lectura parcial y superflua de dicha presentación. De dicha presentación se extrae meramente que el pedido de inscripción del proceso como colectivo, dado que la acción impetrada pretendía dicho alcance colectivo pero sin indicarlo expresamente, lo que podía generar una causa cuya sentencia se pretendiese colectiva pero sin que esta estuviese inscripta en el registro, lo que atentaría

contra los fines que tuvo en miras la Corte al momento de reglamentar en la Acordada N° 12/2016.

En tercer lugar, no se verifica en el caso la invocada doctrina de los actos propios, en tanto no existe conducta anterior jurídicamente relevante, inequívoca y eficaz que resulte incompatible con la posición asumida en estas actuaciones. Por el contrario, el Estado Nacional ha mantenido una postura coherente al cuestionar la legitimación colectiva de la actora por no encontrarse acreditados los recaudos exigidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En consecuencia, el argumento del magistrado no sólo resulta improcedente, sino que pone en evidencia un intento de suplir la ausencia de acreditación de los requisitos de la acción colectiva mediante la invocación de circunstancias ajenas al proceso, lo que no puede ser convalidado. Aquella presentación no tiene el alcance ni los términos que el Juez le endilga. **El *a quo* claramente no diferencia entre el carácter de colectivo de un proceso y su inscripción –incluso preliminar–, con la legitimación procesal.**

A su vez, **tampoco comprende que la legitimación como presupuesto de la acción no se suple por consentimiento de partes: si la legitimación no existe aquello no se subsana por el aval de la demanda, y debe igualmente ser declarada de oficio.**

En otro orden, el sentenciante recepta sin mayor análisis los dichos de la actora en cuanto sostiene que representa a federaciones, sindicatos afiliados a la entidad actora. Sin embargo, dicha afirmación no es compatible con el sistema de organización sindical vigente.

Por el contrario, los trabajadores se encuentran representados en forma directa por sus respectivos sindicatos de base, los cuales pueden o no integrarse en federaciones y éstas, eventualmente, en confederaciones como la actora.

La pretensión de representar a “todos los trabajadores” configura así una indeterminación inadmisibles.

Pretender arrogarse la representación de la totalidad de los trabajadores del país implica una inadmisibles generalización que desconoce tanto la autonomía de las asociaciones sindicales como la diversidad del universo laboral.

El propio marco legal en el que la accionante intenta fundar la representación de trabajadores establece que son los sindicatos con personería gremial quienes tienen el

derecho de defender y representar, ante el Estado y los empleadores, los intereses individuales de los trabajadores (artículo 31, Ley N° 23.551).

Para ello, los trabajadores deberán haber brindado el consentimiento por escrito de cada uno de ellos (artículo 22 del Decreto N° 467/88, reglamentario de la norma sustantiva), **aspecto que no fue acreditado en estas actuaciones y cuya validez no está controvertida**. El artículo 22 del Decreto N° 467/88 establece que “*Para representar los intereses individuales de los trabajadores deberá acreditar el consentimiento por escrito, por parte de los interesados, del ejercicio de dicha tutela*”.

A ello se suma que no todos los trabajadores registrados se encuentran afiliados a organizaciones sindicales. Menos aún se hallan afiliados los trabajadores no registrados, a quienes la ley atacada pretende brindar herramientas para que puedan insertarse en el nuevo marco legal del trabajo.

Asimismo, no todos los sindicatos integran federaciones, ni todas las federaciones forman parte de la CGT.

Por consiguiente, la legitimación invocada resulta meramente dogmática y carente de sustento fáctico concreto. Ejemplo de ello es que todo trabajador no formal se le niega la afiliación a una organización sindical de primer grado con el argumento de que no pueden exigir a su empleador la retención de la cuota sindical correspondiente, por carecer de recibo formal, lo que además encubre el rechazo de cobertura médico asistencial por parte de la obra social administrada por la misma asociación profesional de trabajadores.

La CGT no persigue la tutela de un derecho subjetivo propio, personal, actual y concreto, sino que procura la declaración de inconstitucionalidad y la suspensión de los artículos mencionados anteriormente de la LML, con efectos claramente expansivos y *erga omnes*, en un proceso planteado en carácter consultivo por cuanto los perjuicios invocados son abstractos.

Cabe agregar que en su escrito de demanda, aun pesando la carga de la prueba sobre el que lo alega, la contraria desde su juicio no dedicó ni una línea para justificar por qué detenta la representatividad colectiva de todos los trabajadores de la República Argentina.

En este sentido, como se explicó *ut supra*, la CGT se limitó a mencionar que tendría legitimación, conforme a la Ley N° 23.551, para representar gremialmente a los

trabajadores. No obstante, confundió la representación gremial con la legitimación para representar en juicio a un colectivo en el marco de una demanda colectiva.

A este punto debemos tener en cuenta que **la representación colectiva no es una regla, sino un supuesto extraordinario para casos particulares regulados por ley o contemplados por estrictas normas**. Este carácter excepcional impone a los jueces el deber de analizar exhaustivamente los requisitos que deben reunirse para resolver la acción intentada. **Caso contrario, se llegaría al absurdo de habilitar a que cualquier ciudadano se arrogue la facultad de representar a un conjunto de sujetos de derecho**, lo que comporta una gravedad tal como la de subrogarse derechos de la sociedad argentina entera (la cual es, en rigor, el colectivo cuya representación las actoras buscan subrepticamente arrogarse) sin tener la representación para ello.

En este sentido, en materia de derechos individuales, la regla es el ejercicio individual por su titular y la acción colectiva opera como excepción de interpretación restrictiva; por ende, para la admisión formal de una acción colectiva deben verificarse los siguientes requisitos: (i) una causa fáctica o normativa común (Fallos: 332:111; 344:575); (ii) que la pretensión esté concentrada en los efectos comunes y no en daños diferenciales (Fallos: 332:111); (iii) que el ejercicio individual no aparezca plenamente justificado y exista riesgo de afectación al acceso a la justicia (Fallos: 332:111), con la salvedad indicada por la Corte cuando existe fuerte interés estatal en la protección por trascendencia social o características del sector afectado (Fallos: 332:111); y, además, como recaudos instrumentales indispensables (iv) la precisa identificación del grupo o colectivo (Fallos: 343:1259, con cita de Fallos: 338:40 y 338:1492), lo que a su vez permite delimitar los alcances subjetivos de la cosa juzgada y verificar los restantes presupuestos (Fallos: 338:40; 339:1077; 339:1223; 343:637 del voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti); (v) la idoneidad/representación adecuada de quien pretende asumir la representación (Fallos: 332:111; 339:1223; Acordada 12/2016).

Ninguno de tales recaudos se encuentra satisfecho aquí: no se identificó un colectivo con criterios ciertos, objetivos y comprobables; tampoco se acreditó una homogeneidad fáctica y jurídica en derechos e intereses afectados distinta del mero dictado de la LML; no se demostró una afectación real del acceso a la justicia que justifique desplazar la regla del ejercicio individual, ni los actores acreditaron

representación adecuada para proyectar efectos *erga omnes*. **La CGT no dedicó ni siquiera una línea de su presentación para demostrar dichos requisitos.**

Por lo tanto, no se encuentra acreditada la legitimación colectiva que la actora pretende arrogarse, lo que torna improcedente tanto la acción como la medida cautelar dictada en su consecuencia, lo que así se peticiona declare V.E. Con expresa imposición de costas a la actora.

3.5. QUINTO AGRAVIO: NO SE CONFIGURAN LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN EL ART. 13 DE LA LEY N° 26.854. AFECTACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO. ARBITRARIEDAD DE SENTENCIA.

Por otro lado, causa agravio a los intereses del Estado Nacional que el juzgador otorgue una medida cautelar sin que se configure una lesión a un derecho subjetivo del accionante o de las persona que sostiene representar

En este aspecto, adviértase que el *a quo* en ningún momento analizó los artículos que intenta desarticular el actor; sin embargo, mediante el abordaje de cuestiones formales, intentó justificar la procedencia del otorgamiento de la medida cautelar para así suspender numerosos artículos de la Ley N° 27.802 cuestionada.

Analícese los fundamentado del *a quo* en la sentencia al respecto:

“1. En el análisis de los aspectos sustanciales de la acción, en este caso se cumplen en el caso los tres requisitos básicos: (a) estado de incertidumbre actual sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica concreta (en el caso de incidencia colectiva en relación a la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley 27.802); (b) puede producir perjuicio o lesión inmediata en el accionante (y en sus representados, al tratarse de regulaciones inherentes a las relaciones individuales y colectivas del trabajo); (c) no existe otro modo legal idóneo para poner remedio inmediatamente a esa incertidumbre, pues no hay acción que pueda generar certeza con mayor premura que la escogida por la accionante (art. 43 CN). 2. Lo hizo a través de una acción colectiva, invocando la representación de los trabajadores y trabajadores de la República Argentina.”

“Es criterio pacífico que, a los fines del dictado de medidas cautelares, no se requiere certeza absoluta acerca de la existencia del derecho invocado, sino la comprobación de su apariencia razonable, suficiente para justificar la tutela

jurisdiccional preventiva mientras se sustancia el proceso principal (CSJN, "Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi Graf S.R.L.", Fallos: 320:1633, sentencia del 7 de agosto de 1997)."

"Sin perjuicio de ello y para disipar temores 'el peligro en la demora' que veo configurado en la causa es de modo superlativo, previéndose que en caso de no admitirse la cautela intentada, la ejecución de la potencial sentencia de condena pudiese tornarse ineficaz o bien de imposible cumplimiento, generando daños irreparables. Al contrario de lo expuesto por la demandada que sostiene que recién en la definitiva debería adoptarse algún temperamento, razono que es en modo inmediato que debe producirse la suspensión de los efectos de las normas atacadas, para que no se produzca un consumo de derecho que afecten de modo grave a las personas y a las instituciones involucradas.

Hay derechos humanos comprometidos, habrá responsabilidades patrimoniales e institucionales en debate. Millones de contratos vigentes esperan definiciones sobre la aplicación temporal de la ley y certidumbre sobre su contenido. Sin lugar una medida urgente, cautelar, va a derivar en mayor seguridad jurídica para todas las personas e instituciones involucradas, aplicando la norma una vez que haya superado el test de constitucionalidad y convencionalidad que aquí peticiona la actora. El interés público nos requiere templanza y paciencia para enfrentar esta coyuntura llena de incertidumbres."

De los propios términos del decisorio surge que el sentenciante no realizó un análisis concreto de los requisitos exigidos por el art. 13 de la Ley N° 26.854, sino que se limitó a invocar fórmulas generales y afirmaciones dogmáticas.

Es decir, de lo transcripto se advierte evidente y manifiesto que el juez de grado no evaluó si existe algún derecho laboral de aspecto colectivo que se encuentre afectado por la vigencia de la norma. Aún más, no analizó la realidad fáctica que conlleva la aplicación de la norma cautelada, sino que se limitó a enumerar las normas que rigen el instituto de medidas cautelares contra el Estado Nacional para concluir, arbitraria y dogmáticamente que se encuentra configurado la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora y la no afectación del interés público.

3.5.1. AUSENCIA DE VEROSIMILITUD DEL DERECHO

El mentado presupuesto de la verosimilitud del derecho invocado es la exigencia de que el derecho del peticionario de la cautelar se presente como aparentemente verdadero, porque su certeza sólo podría obtenerse eventualmente con el dictado del pronunciamiento definitivo (Fallos: 327:3202).

En esta materia, el *fumus bonis iuris* se integra con un doble requisito de ponderación: verosimilitud del derecho propiamente dicho y verosimilitud en cuanto a la ilegitimidad del acto u obrar impugnado. De tal modo, resulta exigible la verosimilitud del derecho de quien solicita la medida, es decir que deberá acreditarse la existencia de título o razón jurídica suficiente.

Se recuerda que para decretar una cautelar se requiere de un análisis prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un “*fumus bonis iuris*”, siendo admisibles en tanto y cuanto si como resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece como fundada y la reclamación de fondo como viable y jurídicamente tutelable (conf. Alsina, H., *Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil*, Buenos Aires, t. V, pág. 452; Podetti, J. R., *Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral. Tratado de las Medidas Cautelares*, Ediar, Buenos Aires, pág. 77 y ss.).

En igual sentido, se ha dicho que la verosimilitud del derecho, a los efectos de las medidas precautorias, **si existe, está influida por la índole del reclamo principal del que no puede ser desvinculada la cautelar sugerida.** Respecto a la verosimilitud de ilegitimidad del acto u obrar impugnado es preciso destacar que este presupuesto no se encuentra acreditado en autos. Aun cuando mediar la posibilidad de un supuesto perjuicio irreparable –cosa que se niega enfáticamente– la presunción de legitimidad impone una estricta apreciación de las circunstancias del caso en relación al peligro en la demora, y esto es especialmente así cuando la medida enerva las consecuencias de normas dictadas en ejercicio de los poderes que le son propios.

La verosimilitud del derecho y de la ilegitimidad constituyen dos ideas complementarias. En efecto, por un lado, resulta exigible la verosimilitud del derecho de quien solicita la medida precautoria, es decir corresponde al actor acreditar la razón jurídica suficiente, que a su vez debe ser idónea. Pero, por el otro lado, la ley exige acreditar la ilegitimidad del acto o comportamiento estatal.

Tratándose de una ley formal emanada del Honorable Congreso de la

Nación, la verosimilitud del derecho debe evaluarse con mayor rigor en razón de la presunción de legitimidad de las leyes y, más específicamente, desde la verosimilitud de la ilegitimidad. Así debe tratarse de un vicio notorio, serio y grave, por lo que en lo que refiere al acto atacado, se exige una verosimilitud del derecho calificada.

De este modo, junto con la acreditación de la verosimilitud del derecho, es necesario que quien peticiona una medida cautelar acredite la concurrencia de la verosimilitud de la ilegitimidad que se denuncia. La presunción de legitimidad de las leyes obliga al particular que las impugna a demostrar verosímilmente lo contrario, precisando y acreditando la existencia de indicios serios y graves al respecto. Exige, además, que su suspensión sea excepcional y de carácter restrictivo, previa comprobación de su manifiesta ilegalidad o irrazonabilidad, extremo no acreditado en autos.

En efecto, *“de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal, las medidas cautelares no proceden cuando se pide la suspensión de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y de la consideración del interés público en juego. Esta regla cede sin embargo cuando se impugnan actos sobre bases prima facie verosímiles....Debe acreditarse también que exista peligro en la demora para justificar el dictado de la medida, el cual debe resultar en forma objetiva del examen sobre los distintos efectos que podría provocar la aplicación de las disposiciones impugnadas (Fallos: 344:3442 y sus citas)”* (Fallos: 346:1108).

¿Cómo puede tenerse por configurada la verosimilitud del derecho invocado cuando lo que se pretende es la suspensión de una norma dictada por el Congreso de la Nación que persigue, entre otros objetivos, promover la registración laboral, reducir la informalidad y favorecer la creación de empleo en un contexto económico determinado? (MEN-2025-35-APN-PTE).

¿Cómo puede considerarse acreditada dicha verosimilitud cuando la norma cuestionada se inscribe dentro de las facultades propias del legislador para diseñar políticas públicas en materia laboral, orientadas a adecuar el marco normativo a las condiciones actuales del mercado de trabajo?(MEN-2025-35-APN-PTE).

En tales condiciones, la mera discrepancia con el criterio legislativo adoptado

no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de legitimidad de la ley ni para justificar, por vía cautelar, su suspensión.

En suma, la resolución no acredita la existencia de verosimilitud en el derecho invocado. Se limita a: (i) afirmaciones genéricas; (ii) referencias amplias a derechos constitucionales y (iii) apreciaciones dogmáticas.

El sentenciante reprocha a esta parte no haber efectuado una defensa sustancial respecto de las disposiciones cuestionadas, señalando que el único argumento introducido habría sido el carácter conjetural de los daños invocados. Al respecto, señaló: *“5. No hubo una defensa explícita en la presentación de la accionada, respecto a aquellas disposiciones de la ley 27802 que atentarian contra los principios de libertad sindical y autotutela colectiva, señalados enfáticamente por la actora. El único argumento fue el carácter conjetural o hipotético de los daños supuestamente producidos por la nueva regulación de la huelga, de las asambleas, de la negociación colectiva, etc. en tanto no se habrían denunciado hechos que se hubieran visto limitados por la nueva legislación. A poco que se lea el escrito de demanda, se han desarrollado argumentos y fundamentos sobre todas las disposiciones relativas al derecho colectivo del trabajo que fueron atacadas; a cuyos términos no referiré en esta oportunidad para no adelantar criterio.”*

Sin embargo, tal apreciación parte de una premisa incorrecta. El informe previsto en el artículo 4° de la Ley N° 26.854 no constituye una instancia destinada a contestar el fondo de la pretensión, sino que se limita al análisis del interés público comprometido y, secundariamente, de los presupuestos de procedencia de la medida cautelar solicitada. En ese marco, la defensa introducida por esta parte resultó plenamente adecuada a la naturaleza de la incidencia, al cuestionar precisamente la inexistencia de un caso concreto, la falta de afectación actual y el carácter meramente hipotético de los perjuicios alegados.

Por lo demás, lejos de ser un argumento insuficiente, la ausencia de un daño actual y concreto constituye un elemento central para descartar tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora, en tanto impide tener por configurados los presupuestos mínimos que habilitan la procedencia de la acción y, en consecuencia, el dictado de una medida cautelar.

En consecuencia, no puede reprocharse a esta parte la omisión de efectuar un

desarrollo que resultaba ajeno a la etapa procesal en la que se encontraba el proceso, **ni tampoco puede suplirse dicha supuesta ausencia mediante la remisión genérica a los argumentos de la actora, sin efectuar un análisis concreto de los requisitos legales de procedencia de la medida solicitada.**

A su vez, resulta particularmente relevante lo sostenido por el *a quo* cuando afirma que: *“Coincido con la defensa ‘la presunción de legitimidad de la actividad de los poderes públicos sustenta la existencia misma del Estado Constitucional de Derecho’ y agrego: siempre y cuando se respete la Constitución Nacional, porque de lo contrario sería un título vacío, carente de contenido. Justamente ese rol le incumbe al Poder Judicial (art. 116 CN)”*.

No se desconoce que el control de constitucionalidad constituye una función esencial del Poder Judicial en el marco del artículo 116 de la Constitución Nacional. Sin embargo, dicho control no puede ser ejercido de manera irrestricta ni en cualquier circunstancia, sino que se encuentra sujeto a límites estrictos que derivan del propio sistema constitucional.

En particular, la jurisprudencia de la CSJN ha sido conteste en señalar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal constituye un remedio de última ratio, que sólo procede cuando no existe posibilidad de armonizar la norma con la Constitución y en presencia de un caso concreto debidamente acreditado (Fallos: 249:51; 260:153; 288:325; 307:531; 314:424; 324:920; 328:91; 344:3006; 348:1698, entre muchos otros).

En el caso, lejos de verificarse tales extremos, la resolución recurrida anticipa los efectos propios de una eventual declaración de inconstitucionalidad mediante el dictado de una medida cautelar de alcance general, sin que se encuentren configurados los requisitos que habilitan una intervención de tal entidad.

De este modo, el *a quo* no ejerce adecuadamente el control de constitucionalidad que invoca, sino que lo desnaturaliza, transformándolo en un mecanismo de revisión abstracta de normas legales, en abierta contradicción con los principios que rigen el sistema constitucional argentino.

Debe recordarse en este aspecto que las leyes gozan de presunción de constitucionalidad y las mismas solo pueden ser suspendidas en casos excepcionales

(Fallos: 207:238, entre otros).

La resolución omite completamente consignar los presupuestos de la ley para la concesión de la medida decretada; en el caso que nos ocupa no se ha acreditado la verosimilitud del derecho invocado que lo torne merecedor de la medida decretada de la cual pedimos su revocación.

Finalmente, cabe señalar y desagregar en las únicas menciones que el *a quo* hace de las normas que suspende, en cuyo caso se limita a meramente enunciarlas describiendo los cambios que efectúan –aunque sin decir dónde está el perjuicio y si existe tal– o bien reconociendo los efectos favorables de la norma; o, en su defecto, afirmando dogmáticamente un supuesto perjuicio o carga negativa de la norma, aunque sin jamás explicar cómo llega a dicha conclusión –basándose exclusivamente en su afirmación dogmática– o bien evidenciando un absoluto desconocimiento de la norma que suspende. Así, existe un evidente vulneración al derecho de defensa, por cuanto al no explicarse y razonarse la sentencia, la resolución cautelar carece de la debida motivación, al fundarse en dogmatismo y afirmaciones genéricas, e impedir la defensa del sujeto pasivo.

3.5.1.1. Normas suspendidas de las cuales no existió análisis alguno y el juzgador se limitó a enunciar una descripción.

En primer término, cabe considerar que de un conjunto de las normas suspendidas el juzgador se limitó a hacer una mera descripción –sin explicar dónde subyacería la supuesta irregularidad, desproporcionalidad, regresividad o cualquier otro motivo de suspensión, en los casos de los artículos:

1. Artículo 25, al limitarse a señalar que “amplia las formas de cumplir con la entrega de certificados y establece una forma de autocertificación por vías informáticas”. Ahora bien ¿no subyace acaso el interés del trabajador en obtener sus certificados? ¿dónde subyace entonces el perjuicio al trabajador de facilitar las certificaciones? ¿es realmente un perjuicio ampliar las formas de cumplir la entrega? Recordemos que la falta de claridad de los certificados y las formas de cumplir generó una alta litigiosidad. Así, el Juez suspende la norma pero jamás indica dónde subyace el perjuicio de esta, lo que deja en evidencia la absoluta arbitrariedad del fallo. Así, el Juez se limita a describir

la norma, pero jamás explica si esta es un retroceso o no, o si genera un perjuicio y, en tal caso, cuál.

2. Artículo 27, el Juez se limita a señalar que la norma remite a la negociación del tiempo de servicios que será considerado tiempo parcial y que permite la realización de horas extras. Ahora bien, el Juez jamás explica si este artículo genera un perjuicio, cuál, y, en todo caso, como llega a dicha conclusión. Sin embargo, arbitrariamente dispone su suspensión. No se entiende si la remisión a la negociación es considerado negativo o no –en tal caso, cabe preguntarse dónde estaría el perjuicio de aquello–. En caso a la posibilidad de realización de horas suplementarias, expresamente la ley contempla que aquella es voluntaria, por lo que no se entiende dónde subyace el supuesto perjuicio al trabajador –si es que el Juez, en su mera descripción de la norma, entiende que existe tal–.
3. Artículo 30, el Juez se limita a señalar que se amplían las características y requisitos del equipo de trabajo. No se vislumbra de esto si encuentra un perjuicio, un beneficio y cuál es en tal caso –y dónde subyace aquel–. La arbitrariedad y falta de fundamento en este aspecto es total. Así, se suspende un artículo de la Ley, sin siquiera dar un mínimo atisbo de porqué.
4. Artículo 32, se limita a afirmar que quita las propinas del concepto remuneratorio. Jamás el Juez explica si esto es en sí perjudicial o no, o donde se encontraría la irrazonabilidad del tal precepto al llevar claridad a las relaciones jurídicas.
5. Artículo 33, el Juez simplemente señala que el salario dinámico puede tener origen en el CCT o en la voluntad del empleador y no genera derecho a la expectativa. Nuevamente, no se extrae del párrafo escueto y meramente descriptivo de la sentencia dónde estaría el efecto perjudicial, si aquel es fruto de la negociación colectiva o del arreglo entre partes o, incluso, dispuesto por el empleador en beneficio de sus empleados. Incluso, este es un aspecto novedoso, agregado por la norma, que permite dotar de nuevas herramientas en favor del trabajador. No se eliminan los elementos básicos, ni las protecciones principales y, a la vez, se dan nuevas herramientas que permiten mejorar al trabajador.

6. Artículo 41, se limita a señalar que se quita el período obligatorio de goce y que permite fraccionarlo. No se extrae de aquella afirmación si ello es considerado un beneficio o un perjuicio, limitándose a ser algo meramente descriptivo. Sin embargo, es igualmente suspendido, lo que denota lo arbitrario de la decisión, que no dio fundamento alguno para ello.
7. Artículos 42 y 43, nuevamente el Juez se limita a una mera afirmación descriptiva, sin aclarar nada más al respecto.
8. Artículo 48, nuevamente se realiza una descripción de la norma, refiriendo meramente que se elimina el preaviso en periodo de prueba.
9. Artículo 50, nuevamente la sentencia simplemente describe que se calcula en dos meses el plazo para considerar la extinción tácita por mutuo acuerdo. El Juez se limita entonces a suspender una norma que meramente describe y que, al caso, la única diferencia con la redacción anterior es que establece un plazo expreso que permite dar certidumbre tanto al empleador como al trabajador. Así, no sólo no se extrae un perjuicio de aquella, sino que incluso surge claramente un beneficio adicional de dicha norma.
10. Artículo 56, se limita a describir la norma pero jamás explica si considera negativa o positiva o qué carácter. ¿Existe un óbice si se permite el pago en cuotas pero ajustadas con la misma tasa del reclamo judicial de IPC + 3%? ¿el Juez entiendo esto perjudicial o no?. Por otro lado, el límite de responsabilidad por costas, es una norma, también prevista para otros casos (v. art. 730 CCyCN). El Juez no dice si estas previsiones son negativas, positivas y porqué, aunque si se procede a suspenderlas.
11. Artículo 100, se limita a afirmar de forma descriptiva que se flexibiliza el trabajo por equipos. No se extrae de ello la valoración del Juez de la norma ni cómo llega a ella.
12. Artículo 107, describe que en el régimen de trabajo en casas particulares simplemente se amplía el periodo de prueba y se quita la diferencia entre trabajadores con y sin retiro, aunque no aclara más. Nuevamente, la sentencia se base en la mera afirmación dogmática del Juez.
13. Artículo 132, se limita a describir que se modifica el régimen de ultraactividad, sin agregar más. No se extrae si considera positivo, negativo o

siquiera cómo arriba a alguna conclusión –ya que tampoco da ninguna, aunque procede a suspenderlo–.

14. Artículo 133, también se limita a describir señalando que se reduce el aporte al sindicato de trabajadores afiliados y no afiliados. Aquí resulta arduo dudoso: ¿pretende el Juez ver una norma a favor del trabajador donde a aquel no se le sustraiga parte de su sueldo de forma compulsiva por el sindicato o lo ve como negativo porque defiende exclusivamente al sindicato y no al trabajador? ¿pierde de vista el Juez que los institutos del trabajo y los propios sindicatos deben ser para la defensa del trabajador y no para la defensa del sindicato por el sindicato mismo? El Juez no refiere si la norma genera o no un perjuicio, a quién, cómo y, en última instancia porqué la suspende. Asimismo, no puede extraerse un perjuicio *prima facie* que se coloque un tope razonable a los aportes de trabajadores afiliados y, principalmente, de los no afiliados.
15. Artículo 137, se limita a describir la previsión señalando que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social puede convocar a negociar cláusulas vencidas, y también decretar –a pedido de parte– la suspensión de la homologación de cláusulas ultraactivas. Ahora bien, nada de lo descripto explica si aquello es entendido por el Juez como negativo, positivo o en qué carácter.
16. Artículo 141, refiere que se facilita el otorgamiento de personería gremial a sindicatos de ámbito menor (nivel empresa). Aquí no se extrae del fallo si el Juez encuentra aquello como negativo, positivo, siendo una mera descripción de la norma. A todo evento, cabe señalar que reconocer mayor representatividad y eliminar distinciones entre sindicato con y sin personería ya fue motivo de tratamiento por la Corte Suprema, quien declaró la invalidez de ciertos artículos de la Ley N° 23.551 que limitaban aquella (Fallos: 331:2499, entre otros). Así, esta reforma sería acorde a tal jurisprudencia –y no encontraría un óbice constitucional, por el contrario, sería ajustar aquella Ley a la Constitución–.
17. Artículo 145, se limita a describir que la nueva redacción coloca de forma expresa la bilateralización de la práctica desleal y tipifica como tales algunas

prácticas sindicales. No se extrae de la mera lectura de la sentencia si el Juez entendió una carga negativa o no del artículo. Lo cierto es que la práctica desleal, como cuestión de mala fe y abuso del derecho, no era ajeno a ninguna de las partes. Al reglamentarse, se otorga claridad respecto de qué conductas podrán encuadrarse en ella –y cuáles no–.

18. Artículo 146, se limita a afirmar que se regulan los legitimados actos para iniciar la querella por práctica desleal sin incluir al sindicato. Nuevamente, el Juez no indica si aquello genera un perjuicio y, en todo caso, cuál y cómo. La enunciación es meramente descriptiva y no incluye ningún razonamiento al respecto.

3.5.1.2. Normas suspendidas de las cuales el juzgador reconoció efectos positivos o neutros

Por otro lado, al momento de tratar el artículo 34, el Juez parece ponderar más aspectos positivos de la norma. Es decir, admite que no resulta objetable –hasta pondera favorablemente la norma– y, sin embargo, llamativamente procede a suspenderla.

Nótese que admite que no es objetable que se incorpore el cobro de dividendos y la realización de acciones o títulos; el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por uso del transporte público por día efectivamente trabajador. Tampoco encuentra objetable que se incluya como no remuneratorio el comodato de casa-habitación en caso de desarraigo –cuando antes era sólo por dificultad en acceso a la vivienda–. Incluso, considera no objetable que se regule el uso de la telefonía celular.

Es, tal vez, al artículo que más párrafos descriptivos y calificativos dedica el Juez en su sentencia. Incluso, **son todos favorables al encontrar que no existe objeción al respecto. Sin embargo, y de forma absurda, el Juez lo suspende. Es decir, suspende la norma que él mismo encuentra favorable y en beneficio del trabajador.** Esto deja en evidencia la arbitrariedad general de la sentencia. **Se dispuso una suspensión general de lo requerido por la actora, incluso en contradicción con las propias conclusiones del *a quo* en el caso, o que anulan todo lo actuado.**

3.5.1.3. Normas suspendidas donde el juzgador prejuzgó dogmáticamente un supuesto efecto negativo, sin dar motivos ni razonamiento. Arbitrariedad del decisorio.

En último orden, están las normas que el Juez, con una mera afirmación dogmática, afirma un perjuicio –o al menos lo insinúa– por parte de la norma, pero sin jamás explicar y motivar su decisión más allá de la afirmación dogmática. Ello anula la validez del decisorio y afecta irremediablemente el derecho de defensa. Esto, sin perjuicio que en numerosos casos se deja evidencia una falta de comprensión lectora de la norma suspendida, o ausencia de lectura del conjunto normativa, o bien de reglas básicas de hermenéutica legal. Todo esto anula la sentencia dictada.

En tal sentido, en este subgrupo podemos encontrar:

1. Artículo 1°, por supuestamente “reducir el ámbito personal de aplicación de la Ley”. Presupone un efecto negativo, ignorando si los trabajadores no se encuentran aun así protegidos por otro marco normativo. Asimismo, se limita solamente a mencionar a los “prestadores independientes de plataformas tecnológicas”, nada dice de los restantes supuestos. Así, en primer lugar, no dice cómo aquellos se encontraban originalmente abarcados por la norma, ya que la relación era aún motivo de debate. Por otro lado, suspende la norma respecto de todos los casos allí enumerados. Entonces ¿qué sucede con el personal embarcado que tiene su propio régimen? ¿y con los trabajadores independientes y sus colaboradores? ¿no afecta indirectamente la Ley N° 27.742 cuya constitucionalidad no está discutida? A su vez, ¿qué sucede con las personas privadas de la libertad? Ninguno de estos supuestos es analizado y siquiera mencionado, sin embargo, es afectado.
2. Artículo 3°, afirma que se elimina el “in dubio pro obrero”, sin embargo, aquel sigue estando como un principio en el propio artículo 9. La parte reformada – su segundo párrafo– era un criterio de interpretación que se conserva en el artículo 11 de la LCT. Allí se sigue manteniendo como criterio interpretativo de interpretación conforme a los “principios general del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe” ¿no es acaso el in dubio pro operario un principio general consagrado en el artículo 9?. Claramente esta situación denota la carencia de análisis y de una lectura mínima de la norma suspendida por parte

del Juez.

3. Artículo 6°, afirma que se elimina “*el principio de irrenunciabilidad sobre cláusulas contractuales superadoras de la ley o el CCT*” (sic). Ahora bien, el artículo suspendido expresamente dice que “*Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo...*”. ¿dónde la reforma eliminó el principio de irrenunciabilidad que expresamente sigue contemplando? Nuevamente el Juez prejuzga un supuesto carácter negativo de la reforma. Incluso, lo hace señalando una supuesta eliminación que la norma no realiza.
4. Artículo 9, se limita a afirmar que limita la antigüedad computable en el empleo a periodos con pausas no mayores a dos años y afirma, sin explicación alguna que avale su razonamiento, que “*reduce la protección*” (sic). Es decir, desliza una conclusión sin siquiera explicar cómo llega a aquella, lo que importa de por sí una afectación al derecho de defensa y el derecho a una resolución fundada.
5. Artículo 13, el Juez presupone que se elimina la presunción por prestación de servicios por agregarse que estos deben ser “*subordinados*”. Ahora bien, no realiza análisis alguno para llegar a dicha conclusión, por lo que nuevamente se viola el derecho a una decisión fundada, más allá de afirmarse de forma dogmática una conclusión. Pero, a su vez, al referir a la “*relación de dependencia*” la Ley no cambió el umbral de la norma anterior, ya que aquel era un requisito exigido por la jurisprudencia. Por otro lado, presupone un retroceso cuando, en realidad, la presunción no se elimina, sino que se clarifica para evitar la inseguridad jurídica. Así, anula arbitrariamente una norma con la que el legislador buscó dotar de claridad a las relaciones jurídicas.
6. Artículo 16, refiere que se limita la responsabilidad de las empresas que utilicen mano de obra provista por terceros y que elimina la presunción de fraude. Nuevamente, estamos ante una resolución arbitraria, donde no se hace ningún razonamiento para las conclusiones que se afirman. Incluso, no surge de dónde se elimina la responsabilidad de la empresa que utilice los servicios, ya que la Ley N° 27.802 se limita a clarificar que estas responderán por el

tiempo que efectivamente el trabajador preste para ellas.

7. Artículo 17, el juzgador se limita a afirmar que se les quita representación sindical y la posibilidad de ser candidato a cargos gremiales a los trabajadores eventuales. Ahora bien, nuevamente no explica su razonamiento. Si uno analiza el texto anterior la única diferencia es que en la actual redacción expresamente se limita por las características eventuales de la contratación la posibilidad de ser candidato o designado en un cargo gremial, lo que guarda sentido con los institutos gremiales, de representatividad y el tipo de vínculo del trabajador. Nada en el texto anterior permitía suponer un derecho a dichos cargos o candidaturas, y lo único que hizo la ley fue dar luz al respecto.
8. Artículo 18, refiere simplemente que incorpora categorías excluidas de los trabajos por servicios que generan responsabilidad solidaria en la tercerización por empresas usuarias y que también se limita su responsabilidad. Nuevamente, es una afirmación dogmática sin ninguna explicación al respecto y que, otra vez, implica un prejuizgamiento sobre la norma. El Juez no explica qué categorías considera excluidas y si esto es razonable o no. Al mismo tiempo, afirma una limitación de responsabilidad, pero tampoco explica cómo llega a dicha conclusión. La mera lectura de la norma permite afirmar que no existe una responsabilidad diferente a la originalmente prevista en la norma. Nótese que expresamente se prevé que la omisión de requerir los datos indicados genera la responsabilidad solidaria. La eximición de responsabilidad por requerir la información era un extremo ya previsto en la norma original, cuya redacción se simplificó. Antes se ejercía por la negativa (“el incumplimiento hará responsable”) y ahora se está por una positiva (“el cumplimiento... exime”). La irreflexión del Juez deja en evidencia que siquiera leyó la norma que suspendió.
9. Artículo 19, el Juez nuevamente parece insinuar y presuponer una consecuencia negativa, afirmando que se limita la responsabilidad solidaria de grupos económicos quitando la conducción temeraria. Ahora bien, nuevamente no hay razonamiento alguno para la conclusión. No hay análisis alguno que permita afirmar que la eliminación del concepto de conducción temeraria redunde en perjuicio del trabajador o sea un retroceso alguno en

materia laboral al punto de implicar una arbitraria reglamentación de la CN.

10. Artículo 23, el Juez parece dar por sentado una ampliación del ius variandi y una supuesta limitación a las consecuencias del ejercicio indebido. En primer término, no se extrae de la norma una ampliación del ius variandi cual pretende hacerlo parecer el Juez. En el caso, además, no se limitan las consecuencias del ejercicio indebido, sino que se conjuga el derecho del trabajador con las facultades y necesidades del empleador, y se elimina la posibilidad de restablecimiento de las condiciones; ya que lo contrario implicaría mantener una situación de trabajo que ya no resulta útil al establecimiento –pero no se elimina la protección del trabajador que puede considerarse despedido sin causa–.
11. Artículo 24, afirma que quita a “la dignidad” de la persona que trabaja como valor a respetar por los empleadores. Nuevamente el juzgador realiza una afirmación dogmática y parece concluir, sin explicación, en un supuesto perjuicio de la reforma. Resulta cuanto menos cuestionable que un Juez entienda que no incluir de forma expresa la dignidad de la persona humana en una Ley va a permitir que un empleador decida en contra de aquella, cuando resulta de un valor fundamental que se encuentra en otras normas. La simplificación en la redacción reglamentaria no elimina la vigencia de los principios del derecho –entre los que se encuentra la dignidad de la persona humana–. Entender que un principio básico del Estado de Derecho se elimina por su falta de mención expresa denota una falta de reflexión respecto de la norma y –principalmente– del rol de control de constitucionalidad. ¿desde cuándo un principio general del derecho se ve “derogado” por no incluirse su mención expresa en una norma?
12. Artículo 26: el juzgador considera perjudicial la derogación del Capítulo VIII de la Ley N° 20.744. Ahora bien, nuevamente su lectura aislada y apresurada de la norma (que el mismo admite) deja en evidencia su falta de reflexión, cuando la formación profesional no fue dejada de lado, sino mantenida como artículo 11 bis “formación profesional”, conforme la Ley N° 27.802. Así, el juez presupone un perjuicio donde evidentemente no lo hay, lo que denota el carácter irreflexivo de su decisión y la absoluta carencia de análisis al llevar a

cabo una decisión de última ratio. Así, suspende el artículo 26 de la Ley, pero jamás repara que el artículo 4° estableció aquel principio en el artículo 11 bis. Tampoco pondera que el artículo 149, reforma el artículo 4° de la Ley N° 23.546, y agrega en el inciso b), apartado VII), la obligación de la empresa de informar en las negociaciones colectivas los “planes y acciones en materia de formación profesional”.

13. Artículo 28, el Juez afirma dogmáticamente que la reforma al artículo 95 quitaría la posibilidad de reclamar daños y perjuicios provenientes del derecho común. Ahora bien jamás explica de dónde extrae dicha conclusión. Nuevamente, la quita de la mención expresa no elimina la existencia del derecho de obligación, simplemente elimina una mención innecesaria en la norma que trata el derecho del trabajo. Incluso, la nueva redacción contempla que para el cómputo de la indemnización se considerará la antigüedad que se habría acumulado hasta la fecha del plazo originalmente pactado —es decir que la cláusula eliminó una mención innecesaria e introdujo una mejora sustantiva, al contemplar la antigüedad de plazo pactado y no la efectiva—.
14. Artículo 31, el Juez se limita a afirmar que se incorpora una modalidad antes vigente pero que fuera derogada por la Ley N° 26.341, de permitir que los servicios de comedor y alimentación se puedan brindar en establecimientos gastronómicos cercanos. De esa mera afirmación no se desprende ningún perjuicio, ni el Juez lo hace entender así. Incluso, que la modalidad antes permitida, que fuera eliminada y ahora reincorporada no implica *prima facie* ningún perjuicio —ni tampoco el Juez lo afirma así ni tampoco explicaría dónde recaería aquel—. Por otro lado, afirma que la inclusión de planes médicos integrales otorgados en especie o diferencia de pago de cuotas de dichos planes podría implicar en desfinanciamiento del sistema de obras sociales, lleva a una conclusión arbitraria. En primer término, presupone que existe o podría existir un desfinanciamiento —cuestión totalmente hipotética—. Por otro lado, ignora si actualmente las obras sociales y el sistema actual —por cómo está configurado— ya se encuentra desfinanciado o no resulta rentable o en favor del trabajador. Por último, privilegia a la obra social como prestadora por sobre el interés o voluntad del trabajador. Allí cabe preguntarse ¿el sistema

está previsto para beneficio del trabajador como objeto de protección o para la protección de las obras sociales? ¿el interés es la voluntad del trabajador y sus derechos o el de una institución como la obra social que, supuestamente, esta para beneficio de aquel? ¿puede primar el beneficio de esta institución por sobre el beneficio de quien está destinada a proteger? ¿no se cae así en privilegiar a aquella institución por sobre su objeto de protección?

15. Artículo 44, refiere que se incrementan los requisitos en la exigencia del aviso por enfermedad o accidente. Sin embargo, la única diferencia es que aclara expresamente en la segunda parte de la norma que el cese en percibir la remuneración refiere a la “imposibilidad de dar el aviso”. No se extrae, de dicha aclaración de la norma, dónde se encontraría el perjuicio. El Juez tampoco lo aclara, ya que jamás explica cuáles serían los “requisitos” que se “incrementan”. Ello, por cuanto la norma aclara su redacción manteniendo que el aviso deberá darse en el transcurso de la primera jornada de la cual estuviere imposibilitado de concurrir, dando también aviso del lugar donde se encuentra y que aquello será salvo casos de fuerza mayor. Es decir que los requisitos permanecen idénticos, sólo que se coloca el deber de aviso en la primera jornada al principio de la norma, facilitando su interpretación.
16. Artículo 47, se limita a afirmar que “*con pésima redacción*” (no explica jamás dónde encuentra aquella, siendo una mera afirmación dogmática, que impide la defensa de esta parte) “*exime de responsabilidad solidaria por información oculta en la transferencia*”. Ahora bien, la afirmación de que la eximición opera frente a “información oculta” es cuanto menos un acto de lectura superflua del Juez. Nótese que la norma expresamente exige “...*que no fuera de conocimiento del adquirente luego de realizar los actos de debida diligencia para ello...*”. Es decir, que no exculpa sin más al adquirente, sino que le impone una carga de debida diligencia para poder invocar la eximición. Es decir que aquel debe probar la debida diligencia. El Juez jamás repara en dicho aspecto ni porqué resulta contrario a derecho, arbitrario o mal redactado.
17. Artículo 48, el Juez se limita a referir a su suspensión producto de su remisión al artículo 228. Ahora bien, si suspende el artículo 228 por su redacción según el artículo 47 de la Ley N° 27.802, ¿dónde subyace la irregularidad del artículo

48?. Nótese el absurdo de la sentencia en este sentido, al suspender la norma por su reenvío a una norma que a su vez suspende, y por el sólo motivo del reenvío efectuado. Ello evidencia la arbitrariedad y dogmatismo de la sentencia, la que además ignora las reglas básicas de reenvío normativo.

18. Respecto del artículo 51, nuevamente el Juez afirma arbitrariamente un supuesto perjuicio. En primer término, reconoce que los pagos no mensuales y otros elementos eran discutidos. La norma buscó darle claridad al respecto y, sin embargo, el Juez consideró su opinión como más valedera que la del Legislador y suspendió la norma.,. Por otro lado, erróneamente considera que se elimina la obligación y se delega el rol del Estado en el cálculo de topes de convenio. Lo cierto es que el rol del Estado sigue estando, sólo que se simplifica eliminando un paso innecesario y que sólo incrementaba la carga burocrática de forma innecesaria. Basta ir al convenio respectivo para tener el cálculo referido –es decir que aquel no desaparece–. En lo que hace al fondo de cese laboral, el Juez nada dice sobre si entiende que genera perjuicios o no, siendo su mención meramente descriptiva.

En lo que hace la supuesta limitación al principio de reparación plena, lo cierto es que la recepta, torna a la indemnización una reparación tarifada, aunque limitada a los casos de finalización del contrato sin justa causa. En tal caso, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema, aquella es perfectamente válida y no puede presumirse que no resulta una reparación plena. Incluso, la propia jurisprudencia de la Corte reconoce que la contratación privada se resuelve por una indemnización tarifada (Fallos: 322:600; 317:1455). A todo evento, dependerá de un caso concreto la evaluación final al respecto.

Ahora bien, el Juez ignora, por ejemplo, que la nueva redacción contempla los términos de la jurisprudencia de la CSJN en la materia y con el límite del 67% del importe de un mes de sueldo. Así, ignora que la norma que suspende contempla expresamente la jurisprudencia del Máximo Tribunal.

19. Artículo 53, admite que la actualización por IPC de la suma percibida en extinciones anteriores con el mismo empleador no es objetable. Sin embargo, refiere que sí es objetable la remisión al artículo 18 en cuanto a la antigüedad. Nótese que el Juez suspende la norma –a pesar de encontrarla beneficiosa–

por el reenvío al artículo 18. Ahora bien, si suspendió el artículo 18 en su texto reformado ¿cuál resultaba el perjuicio del artículo 53? Nuevamente afecta una norma que reconoce beneficiosa, sin dar motivo suficiente e incluso bajo la excusa de un reenvío a otra norma cuyo texto ya suspendió.

20. Artículo 55, refiere que establece una forma de actualización e intereses para los juicios en trámite inferior a la existente para relaciones vigentes. Ahora bien, ignora que los juicios en trámite no poseían norma alguna que regule, lo que generó una total incertidumbre al respecto y múltiples impugnaciones y dilación en perjuicio de todas las partes. Al establecer un mecanismo, se busca dar claridad a las partes que –cuando inició el litigio que las aúna– no tenían régimen expreso. Asimismo, procede a suspender la norma cuando la Cámara del fuero ha interpretado dicha norma en casos individuales, evaluando en cada situación la validez de la norma. Vale recordar que el diferente tratamiento en diferentes circunstancias no es causal de arbitrariedad y que los criterios elegidos por el legislador para diferenciar categorías se presumen legítimos, siempre que no resulten “categorías sospechosas” en los términos de la jurisprudencia de la Corte.

21. En cuanto al Artículo 57, admite expresamente que no es objetable la norma, ya que en caso de trabajo total o parcialmente no registrado se remitirán las constancias a ARCA para determinar la deuda. Solo cuestiona que no procederá lo relativo a la obra social ya que esta se limita a que el trabajador se hubiera visto privado de cobertura. Ahora bien, nótese que el artículo 278 es una incorporación como novedad a la LCT, ya que no existía previsión semejante con anterioridad. Entonces, en lugar de admitir el aspecto positivo del agregado –que reconoce existe– prefiere suspender la norma porque no se condice con lo que él hubiera preferido que ella dijera. La norma, al ser un agregado y una evolución, es claramente más beneficiosa para el régimen en general y resulta un absurdo que se suspenda aquella por no compartir el Juez el criterio del legislador.

Por otro lado, refiere a la incompatibilidad de accionar por daños fundados en el régimen civil y comercial, y que esto afectaría la reparación integral –limitándose a citar el artículo 19 CN–. En este punto, sin perjuicio del yerro

en el artículo de la Constitución que cita, cabe señalar que la limitación a indemnizaciones tarifadas no encuentra prima facie óbice constitucional, lo que dependerá de cada caso. Asimismo, no excluye la norma daños provenientes de otros supuestos, sino que simplemente lo limita a las cuestiones previstas en la ley.

22. Artículos 58 a 77, coloca en una misma mención de forma genérica un sinnúmero de normas y previsiones. Afirma de forma dogmática que no repararía los despidos injustificados “tal como manda el art. 14 bis...” sin aclarar qué entiende por ello, o cómo el artículo referido establece una forma única y exclusiva de reparación. Tampoco como aquel impide o prohíbe “colectivizar el costo” –ni tampoco que ello pueda suceder o, en tal caso, esté prohibido—. Es simplemente su opinión negativa, expresada de forma dogmática al respecto, sin ningún fundamento más que su mera opinión.

Irreflexivamente afirma que quita fondos a la Seguridad Social y no se blinda de “malas inversiones” del capilar especulativo, o de los costos administrativos. Paradójicamente ignora que, por ejemplo, que el fondo de sustentabilidad de la ANSES opera también en el mercado de valores para mantener el valor de los fondos.

23. Artículo 79, se limita a describir la norma en cuanto remite a la competencia Contencioso Administrativo Federal para los casos que el Estado Nacional o un ente nacional sean parte. Se limita también a señalar que habla de “tutela judicial efectiva”, aunque no explica cómo aquella se vería afectada. ¿acaso insinúa el Juez que sus pares del Fuero Contencioso Administrativo Federal son arbitrarios?. Por otro lado, vale recordar que esta norma no es sino reflejo de la jurisprudencia ya inveterada del Máximo Tribunal, según la cual el Estado Nacional y los órganos que le dependen son sujetos con derecho al fuero federal (Fallos: 345:1219 y sus citas, entre muchos otros).

24. Artículo 101, se limita a afirmar que se crea la categoría de actividades de importancia trascendental, con una cobertura mínima de servicios hoy inexistente, pareciendo dotar de una carga peyorativa a ello. Ahora bien, si no se prohíbe el derecho a huelga ¿dónde está el perjuicio que protejan por el legislador la prestación de determinados bienes jurídicos de terceros? ¿no es

acaso necesario conjugar el derecho de huelga de unos con el acceso a derecho de otros? El primero no se elimina y el segundo se resguarda; y el Juez no da un motivo plausible para entender que aquello es irrazonable, limitándose a su mera afirmación abstracta y dogmática. No hay, asimismo, una categoría considerada sospechosa al momento de establecer las distinciones en la norma y, a su vez, no hay siquiera una mínima mención de porqué dichos servicios esenciales no merecen la cobertura mínima prevista –siendo que se tratan de servicios básicos para el funcionamiento de la sociedad moderna y el cuidado de la vida y salud de las personas, y la educación obligatoria (inicial hasta secundaria, y especial)–.

Por otro lado, se limita a afirmar que la prohibición de huelga de los servicios de seguridad se efectúa “...sin aclarar que se trate de público o privados” (sic). Ahora bien, los “servicios privados de seguridad y custodia” se encuentran en el inciso h) de los servicios considerados “esenciales” (con cobertura mínima obligatoria del 75%). Es decir que la limitación al 100% en los servicios de seguridad, por obvia lectura de la norma, sólo abarca a las fuerzas públicas.

25. Artículo 111, el Juez simplemente se limita a afirmar que se elimina la figura de fraude por interposición y regula la responsabilidad solidaria por contratistas, eliminándola para arrendatarios en los casos de trabajo agrario. Nuevamente el Juez no hace ninguna valoración ni análisis de si la norma es beneficiosa o si genera algún perjuicio. La afirmación se limita a describir y nada más. Incluso, no se elimina el fraude por interposición, sino que se regula y se ajusta a los servicios efectivamente prestados –y no de forma absoluta–. Nótese incluso la ausencia de lectura del Juez de la norma en cuestión, donde el párrafo original eximia a arrendatarios y la nueva norma simplemente equiparó a los que explotan y los que no –es decir que equiparó a quienes antes distinguía, sin que exista un mínimo argumento de la actora o del Juez respecto de una ilegitimidad en la distinción efectuada por el Legislador–.
26. Artículo 132, refiere que se eliminan las cláusulas destinadas a favorecer la acción de las asociaciones de trabajadores en defensa de los intereses profesionales. El Juez se limita a afirmar en tal sentido, dando un aparente carácter negativo, aunque simplemente el texto vuelve a la redacción original

de la norma, sin explicar dónde subyacería el carácter negativo o cómo se arriba a él.

27. Artículo 134, afirma que se condiciona y limita la integración de comisiones paritarias. Si bien parece el Juez insinuar un aspecto negativo –al afirmar que se condiciona y limita– lo cierto es que aquello no se extrae de la norma. La única reforma es que se aclara expresamente que las comisiones deberán ser del mismo ámbito personal y territorial de cada convenio.
28. Artículos 135 y 136, afirma que se modifica el régimen de prelación de los convenios colectivos, que se da prioridad a los de ámbitos menor y se permite la modificación *in pejus*. En primer término, mezcla dos normas para extender los efectos de una a la otra, en lugar de tratarlas de forma individual. En otro orden, cabe señalar que el artículo 135 simplemente establece la prelación de los convenios de empresa disponiendo que aquellos predominarán sobre los de ámbito mayor. De aquel no se extrae dónde estaría realmente el perjuicio, si es que el Juez entiende que existe tal.

Por otro lado, es el artículo 136 el que permite las modificaciones de convenio. En el inciso a) no varía la redacción o la posibilidad de cambio del convenio posterior al anterior. Basta para ello la mera lectura del artículo 19 de la Ley N° 14.250 previo y posterior a la reforma. En el inciso b) que autorizaba el cambio siempre que el nuevo sea en favor del trabajador, aclarando que la comparación sería por instituciones. En el nuevo inciso b) se aclara la prevalencia del convenio menor frente a uno mayor. Es decir que se deja en manos de la negociación del sindicato la obtención de mejores condiciones para los trabajadores de una empresa puntual, que vayan más allá del convenio mayor. Ahora simplemente se aclara expresamente que la modificación puede ser “en cualquier sentido” o que el convenio menor prevalece sobre el mayor. Nada de lo expuesto permite entender que se contravienen principios generales, como sumaria y dogmáticamente parece insinuarlo el Juez, y que se admitan cambios que impliquen retrocesos en derechos obtenidos. Al contrario, se da flexibilidad para que cada convenio menor pueda ajustarse a la empresa y lograr mejores beneficios para los trabajadores que, en caso contrario, se verían sujetos a un convenio mayor que no contemple las

particularidades de la empresa o el lugar.

29. Artículo 138, afirma el juez que se establecen reglamentaciones limitativas al derecho a realizar asambleas. Sin embargo, a poco que se lea la norma anterior y la actual, surge que no existe el “límite” señalado, sino que aquel ya existía y simplemente se aclara su alcance, a fin de evitar disquisiciones interpretativas, dando más claridad al término a la parte final. Incluso, la redacción nueva no refiere a “afectar” (término amplio y ambiguo). Se aclara también qué aspectos pueden interpretarse como afectar el normal desarrollo de la empresa –previendo situaciones que podrían considerarse como tales–.
30. Artículo 139, refiere que las sanciones por infracciones muy graves por ciertas medidas coactivas en huelga ya contarían con penas en otros dispositivos y ello violaría el *non bis in idem*. Ahora bien, la afirmación y consecuencia resultan dogmáticas. Jamás explica ni da siquiera un ejemplo de a qué normas refiere, las compara y demuestra cómo aquella situación se presenta. La sentencia resulta en este punto absolutamente arbitraria y atenta contra el derecho de defensa –con la gravedad de suspender en el proceso una norma del Congreso–.
31. Artículo 140, refiere que se “atomiza” la representación al equiparar sindicatos con y sin personería en cuanto a la representación del interés colectivo. Aquí el Juez aparenta darle una carga peyorativa a la norma, aunque esta simplemente refleja años de jurisprudencia del Máximo Tribunal, donde equiparó a las asociaciones meramente inscriptas con las que poseían personería (v. Fallos 336:672 y 331:2499, entre otros). Así, el Juez no explica cómo redundaría esto en perjuicio de los trabajadores, y evidencia un desconocimiento en la evolución del derecho en la materia, en la protección de los trabajadores y en la propia materia laboral. Debe recordarse que la Corte ha señalado que “...declaró la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la ley 23.551, en la medida en que concedían a los sindicatos reconocidos por el Estado como más representativos –mediante el otorgamiento de la personería gremial– privilegios que excedían de una prioridad en materia de representación...lo cual iba en detrimento de la actividad de los sindicatos simplemente inscriptos...” (Fallos: 336:672). De ello que no se entiende dónde

está el perjuicio para el trabajador y los sindicatos de ayornar la norma en función de la jurisprudencia de la Corte Suprema.

32. Artículo 142, se limita a señalar que se reglamenta la cantidad de crédito horario para realización del trabajo sindical y afirma que se hace con “criterio limitativo que no existía”. El Juez nuevamente incurre en un yerro, ya que el límite existía y era establecido por convenio. Lo que se hizo fue reglamentar los casos por fuera de convenio –para dar un mínimo cierto de horas retribuidas pero, a su vez, se mantuvo el mejor derecho que reconozca el convenio aplicable–.
33. Artículo 143, refiere que reduce el espacio temporal y amplía requisitos en la tutela de los candidatos a cargo de representación gremial. El Juez no realiza ningún análisis y dogmáticamente afirma una supuesta reducción temporal y ampliación de requisitos. Lo cierto, en primer término es que la norma no sustituye el plazo sigue siendo de seis (6) meses. La simple lectura de la norma lo evidencia, por lo que la afirmación de la reducción del espacio temporal entra en abierta contradicción con la letra de la ley. En cuanto a los requisitos para la tutela, el único cambio que podría considerarse en tal sentido es la falta de obtención de un mínimo de 5% de votos emitidos, lo que el Juez jamás explica cómo esa modificación sería inconstitucional o afectaría el derecho, teniendo en cuenta que la representación es mínima (y guarda relación con normas similares del derecho electoral general).
34. Artículo 144, refiere que se reduce el ámbito subjetivo de protección y establecen límites temporales para la protección de congresales. Ahora bien, jamás explica en qué consisten esta supuesta reducción, si esta es irrazonable o ilegítima, ni da ningún fundamento a lo que entiende –o desliza– como una carga negativa. Resulta incluso paradójico, ya que si bien se autoriza al empleador a prescindir de los servicios, le impone la carga de notificarlo en 48 horas al Ministerio y a mantener el cumplimiento de los deberes de ley con relación a la relación laboral, teniendo un plazo de caducidad de 10 días para iniciar la acción de ante el juez competente para justificar su decisión. Las normas a favor del trabajador en cuanto acciones no se alteran, pero se agrega la obligación y límite al empleador.

35. Artículo 147, refiere que con las penas por práctica desleal incluye la revocación de la personería o inscripción gremial, por parte de la Justicia Nacional del Trabajo, que según él, también se vacía de competencia y se prevé su traspaso a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, no se vislumbra exactamente dónde entiende el Juez que aquello podría ser negativo, y tal vez la afirmación es más descriptiva, si no fuera por la crítica al traspaso de la justicia laboral. Ahora bien, este último aspecto es ajeno a la litis, y que se asigne competencia y control judicial a las penas por práctica desleal, lejos está de ser una situación que pueda merecer reproche constitucional.
36. Artículo 148, refiere que es una falacia establecer en grado de apelación a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que según él la ley prevé cerrar. Ahora bien, la propia ley –que el magistrado ignora– establece qué casos encuadrarán dentro de la justicia local del trabajo y cuales ante la federal, según los criterios, lo que hace la Ley es establecer expresamente los recursos. Es decir, crea un recurso directo –acción propia e independiente– frente a la resolución de la autoridad administrativa que tramitará ante la Cámara. Nuevamente, se involucra en juzgar o valorar el traspaso de la justicia laboral, cuestión que excede la litis.
37. Artículo 149, refiere que se da prioridad al ámbito de negociación menor, aunque no explica si aquello lo ve como negativo o positivo. La posibilidad de negociación en ámbitos inferiores permite que las empresas y sindicatos inferiores que puedan conseguir mejor condiciones pacten en particular. No se extrae de ello perjuicio alguno. Luego, entiende si de forma negativa que se atribuyen exceso en atribuciones a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, aunque admite que es “como la norma hoy vigente”, entonces, si es como la norma vigente, no existe el cambio pretense en el que busca fundar su suspensión. Incluso, el Juez ignora que la norma reglamenta la negociación de buena fe, dentro del cual incluye que la empresa informe su situación económica, el costo laboral unitario, planes y acciones en materia de formación profesional. Más aún, deja sin efecto el inciso c), que resulta una innovación de gran trascendencia, al obligar a negociar de buena fe en los procedimientos preventivos de crisis y concursales, obligando al empleador a

determinados deberes de información en favor de los trabajadores a través de la representación sindical, sobre las causas de la iniciación del procedimiento y obligando a informar de determinadas materias en particular ¿acaso ello no es un avance frente a la situación actual? Lamentablemente, el Juez procede a suspender la norma sin siquiera considerar sus términos y los efectos perniciosos que su fallo irreflexivo genera.

38. Artículo 199, deroga la Ley N° 27.555 y su modificatoria. El Juez se limita a afirmar que aquella contiene normas tuitivas a favor de personas que trabajan en modalidad de teletrabajo. Ahora bien, la propia Ley N° 27.802 deja en claro que aquella derogación recién será efectiva a partir del 1 de enero de 2027, con lo que cabe preguntarse ¿dónde vio el peligro en la demora de una norma cuya derogación recién operará a los ocho meses? Tampoco realiza una ponderación de aquella norma, ni siquiera que la suspensión de la derogación de una norma técnicamente no hace renacer a la norma derogada.

Artículo 207, enuncia que se deroga el artículo 28 de la LCT que a su entender es una norma antifraude y tuitiva para los auxiliares del trabajador. Sin embargo, de aquello, no analiza que la situación puede continuar cubierta por las normas generales del trabajo, sin necesidad de aquel artículo. Así, presupone un perjuicio sin siquiera analizar si la situación sigue protegida por las normas generales. También critica de este artículo la derogación del artículo 275, que establecía la sanción por conducta temeraria o maliciosa. Ahora bien, no señala dónde está el perjuicio, atento a que él mismo reconoce que en la práctica era de aplicación muy restrictiva. . Ahora bien, este último no es objeto de la medida cautelar ni del objeto de demanda, lo que denota un absoluto exceso del Juez respecto de los planteos de autos. Nótese que tanto el objeto cautelar como de demanda limitan al artículo 207 en tanto deroga el artículo 28 de la LCT (v. pág. 2 y 72 de la demanda). Esto es una prueba más de la improvisación del magistrado que en un raid irreflexivo suspendió sin fundamento diversos artículos y sin evaluar qué se estaba requiriendo.

39. Artículo 208, se limita a señalar que se deroga el artículo 6 de la Ley N° 11.544 que –a su entender– establece normas preventivas para evitar el abuso de jornada. Sin embargo, no analiza la norma y dicta de forma dogmática lo que

pareciera ser una presunción de supuesto perjuicio que no es tal. El control y prevención de abuso de jornada sigue estando presente, pero el Juez no analiza nada al respecto y se apresura al suspender la norma –lo que, valga reiterar, no hace renacer a la norma derogada–.

40. Artículo 211, en cuanto deroga los artículo 10, 16 y 21 de la Ley N° 14.250 y a su criterio elimina la posibilidad de extensión territorial, desestructura el modelo de negociación (aunque nunca explica cómo) y fomenta (a su entender sin explicar cómo) la atomización sindical. Ahora bien, nuevamente de forma arbitraria, el Juez contempla el artículo 21 de la Ley N° 14.250, fallando *ultra petita*, ya que aquel no se encuentra contemplado en el objeto ni de la demanda ni de la cautelar. Vale remarcar que la demanda se limita a criticar la derogación de los artículos 10 y 16, pero nada dice del 21. Por otro lado, no limita la extensión territorial, sino que elimina la facultad de que el Ministerio (Secretaría) de Trabajo lo extendiendo por fuera de la voluntad de las partes (artículo 10) y, a su vez, deja librados los ámbitos de negociación (dando más libertad a las partes, eliminando las clasificaciones redundantes).

3.5.1.4. Normas suspendidas de forma *extra petita*.

Finalmente, cabe tener presente que la falta de verosimilitud en el derecho se agrava cuando se vislumbra que numerosos artículos fueron mencionados y suspendidos por el *a quo* excediendo la propia petición cautelar de la actora. **En tal sentido, los artículos 3, 25, 44, 53, 55 59 a 77, 107 y 208 de la Ley N° 27.802 están siendo suspendidos por la sentencia, cuando aquellos siquiera formaron parte del pedido cautelar (v. páginas 72), lo que evidencia una evidente parcialidad, falta de reflexión y análisis por parte del Juez, que siquiera reparó en qué normas estaba llamado a analizar. El fallo *extra petita* deja en evidencia que la propia afirmación del Juez, en cuanto consideró su “tiempo de análisis” que se tomó, claramente no resultó el requerido para tomar una decisión de la trascendencia que tomó de forma absolutamente irreflexiva.** La ausencia de siquiera analizar seriamente las normas y limitarse a lo requerido a fallar, deja en evidencia la arbitrariedad del decisorio y no sólo respecto del exceso, sino de toda la actuación en general.

3.5.2. INEXISTENCIA DE PELIGRO EN LA DEMORA

El sentenciante incurrió en un error manifiesto al tener por configurado el peligro en la demora para la procedencia de la medida cautelar, pues omitió ponderar lo establecido en la Ley N° 26.854.

De más está decir que la suspensión de los artículos de la ley en crisis solicitada en el caso exige que el interesado cumpla con la carga de demostrar que, de no concederse la pretensión cautelar, sobrevendrá un daño irreparable, cuestión que, en el caso, no se ha cumplido, como ya ha sido indicado.

De allí que la tutela cautelar se percibe como un verdadero nexo de evitación, pues adviene para quebrar la relación de causalidad que previsiblemente existe entre el daño irreparable y la ejecución del acto mientras dura el proceso judicial. Pues cabe recordar que no sólo debe ponderarse la irreparabilidad del perjuicio del peticionante de la medida, sino también el del sujeto pasivo de ésta, quien podría verse afectado de manera irreversible si la resolución anticipatoria es mantenida *sine die*, de lo cual se deriva que la alteración del estado de hecho o de derecho debe encararse con criterio restrictivo (Fallos: 334:259 y 333:1885).

Ciertamente, ello reconduce a una nueva encrucijada: ¿cuándo puede decirse que hay daño irreparable? En el caso *sub examine*, como exponemos a continuación, no existe ni daño irreparable –o de cualquier tipo– generado a la actora.

Cabe agregar que, tal como sostiene Lino E. Palacio, toda medida cautelar se halla condicionada a la posibilidad de que, en caso de no adoptarse, sobrevenga un perjuicio o daño inminente que transformará en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado (PALACIO, Lino E. *Manual de Derecho Procesal Civil*. Abele Perrot, 20° Ed., pág. 640), extremo que de ningún modo se configuraría en el supuesto de autos.

En tal sentido, debemos considerar que siempre que se invoca una pretensión procesal se manifiesta la existencia de un daño, real o potencial. El "peligro" como requisito de una medida cautelar no se refiere solamente a la existencia de ese daño sino a su irreparabilidad en la sentencia futura con motivo del paso del tiempo.

Dicho de otra forma, el “peligro en la demora” se refiere a la ineficacia de la

decisión jurisdiccional si no se adopta la medida requerida. Para que ésta proceda no basta que el peligro sea real, actual y concreto, es preciso que el peligro consista en la irreparabilidad del daño para cuando recaiga la sentencia en el juicio.

Aún cuando mediere la posibilidad de un perjuicio irreparable, la presunción de legitimidad de las leyes impone una estricta apreciación de las circunstancias del caso en relación al peligro en la demora, y esto es especialmente así cuando la medida de no innovar enerva las consecuencias de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación en ejercicio de sus poderes de regulación de las universidades (art. 75, incs. 18 y 19 de la Constitución Nacional; Fallos: 320:1027).

La actora en modo alguno demostró cuál sería el perjuicio concreto, o siquiera potencial, que generaría la norma cuestionada; y mucho menos lo explicitó la sentencia impugnada. Por el contrario, ambas se basan únicamente en conjeturas y en manifestar y sostener su descontento con la misma.

Como se ha justificado precedentemente, el caso de autos no amerita el dictado de la medida cautelar peticionada por no reunirse los recaudos previstos en la Ley N° 26.854, como tampoco los previstos en el CPCCN.

Todo lo expuesto demuestra claramente que bajo ningún punto de vista se pueden considerar cumplidos los requisitos que tornan procedente la medida decretada. Como lo ha sostenido la jurisprudencia de la CSJN, la finalidad de la medida cautelar es asegurar la eficacia de la sentencia definitiva en el juicio principal iniciado, mas no convertirse en tal (Fallos: 327:320).

En cuanto al peligro en la demora, se insiste, que además de no fundamentar la existencia de tal recaudo, el peligro debe ser irreparable. Reiterada jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha dispuesto que el examen de la concurrencia del peligro en la demora impone una apreciación atenta de la realidad comprometida con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277).

En síntesis, no se verifica en autos perjuicio actual, daño irreparable o “urgencia” real.

Tal como surge del informe producido por mi representada, los efectos de

la ley dependen de actos futuros, no existiendo afectación inmediata que amerite la intervención del poder jurisdiccional.

La sentencia presume el peligro sin sustento fáctico, lo que configura un supuesto de arbitrariedad.

El decisorio recurrido vulnera el derecho de defensa del Estado Nacional, ante el claro apartamiento de las normas aplicables al proceso por cuanto contraría la normativa legal vigente en la materia, con omisión de consideración de pruebas y elementos conducentes para una adecuada solución de la litis.

Asimismo, el resolutorio carece de fundamentación suficiente ante la falta de explicitación de un razonamiento lógico por parte del juzgador, lo que vulnera el derecho de defensa y debido proceso, descalificando la sentencia como acto jurisdiccional válido (Fallos: 304:279; 316:420 y sus citas y 320:1546, entre otros), lo que amerita su anulación y revocación.

Por otra parte, se destaca la improcedencia de la medida en tanto los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado. (art. 9º, Ley N° 26.854).

Si bien las medidas cautelares no exigen del Tribunal examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien las solicita la carga de acreditar, *prima facie*, la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que la justifiquen. Como surge en autos, esto no ha sido de ninguna manera justificado; sin embargo, el juzgador ha decretado una medida cautelar en total ausencia de los requisitos ineludibles que hacen procedente su dictado.

3.5.3. LA AFECTACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

La doctrina ha definido al interés público como *“la medida y el límite con que las medidas cautelares han de ser decretadas, dado que aquel debe prevalecer siempre. Para ello, deberá observarse si su dictado resulta menos dañoso para la comunidad que su rechazo”* (Gallegos Fedriani, P., “Las medidas cautelares contra la Administración Pública”, Depalma, 2002).

Dicha exigencia también ha sido expuesta por la Corte Suprema de Justicia de

la Nación como un requisito de “ineludible consideración” (Fallos: 314:1202, “Astilleros Alianza”). Sin perjuicio de la presunción de legitimidad que ostentan los actos estatales, por la cual se presume que toda la actividad estatal (tanto legislativa, como ejecutiva y judicial) guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario.

La medida cautelar decretada suspende una ley del Congreso, interfiere en políticas públicas y altera el equilibrio de poderes. Se recuerda que el Poder Judicial debe mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que les incumben a los otros poderes (Fallos: 316:2940; 338:488; 341:1511), toda vez que el Poder Judicial es el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional. Así, siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno (Fallos: 1:32; 347:1363, entre muchos otros)

La propia resolución reconoce la gravedad institucional del caso, pero igualmente concede la cautelar, incurriendo en una contradicción insalvable.

En efecto, tratándose de una medida cautelar contra el Estado Nacional, los jueces no pueden desentenderse del interés público comprometido, lo que exige sopesar cuidadosamente el objetivo de interés general de las disposiciones que se suspenden frente a los intereses individuales alegados en el proceso (Fallos: 347:1476, voto del juez Rosatti).

En línea con ello, la Corte Suprema ha señalado que este tipo de medidas deben ser de aplicación restrictiva cuando se encuentra comprometido el interés público. En este sentido, cuando las exigencias del interés público involucradas en la ejecución del acto resultan de gran intensidad, sólo perjuicios de más elevada consideración aún podrán determinar la suspensión de su ejecución; mientras que cuando esta medida tenga bajo impacto en el interés público bastarán perjuicios de menor intensidad.

Este criterio ha sido aplicado por todas las salas de la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo contencioso Administrativo Federal cuando denegar la medida provocaba un daño mayor que concederla, y viceversa (Sala I, causas "Intercréditos", resol. del 22 de noviembre de 2011; y 47.861/11 "Shimisa", resol. del 24/01/12; Sala II, causa 22.503/2013 "Grana", resol. del 27/03/14; Sala IV, causas 18.357/11, "Pacheco", del 30/08/11; y 63650/2017/1/CA1, "Correa", resol. del 11/10/18; Sala V, causas "Thelonious", resol. del 28/12/11; 36.687/2015 "AGP SE", resol. del 12/07/16; y 8.137/2014, "Cámara Empresarial de Transporte Interurbano", resol. del 30/05/17)" (Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. Sala IV. "Chomer, Sara Viviana c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Hacienda de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986", causa N° 381/2019, sentencia del 5/11/19)

De tal forma, suscita agravio a mi mandante la indiferencia incurrida por el juez de grado, quien decretó una medida cautelar en contra la LML anteponiendo intereses particulares, por sobre los intereses realmente comprometidos en lo que aquí se debate.

Resulta necesario exponer cuáles son los riesgos de encontrarnos con un Poder Judicial que desatienda las necesidades impostergables que hoy tiene la República Argentina.

Nuestro país se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico.

La indiferencia al entendimiento de la situación y la anteposición de intereses particulares por sobre los de la Nación pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común.

La reforma laboral introducida por la Ley N° 27.802 procura revertir un prolongado período de estancamiento normativo, tendiendo a actualizar la reglamentación, las relaciones laborales en consideración de los intereses de los trabajadores, de los empleadores y de la comunidad en su conjunto.

La medida cautelar decretada contraría una decisión tomada por el Honorable Congreso de la Nación, orientada a la inserción del país en los mercados internacionales y a la generación de empleo formal, objetivos que el Congreso evaluó y ratificó en el proceso de sanción de la Ley N° 27.802. Objetivos

que son de competencia propia del Congreso, tanto en su facultad de dictar los códigos de fondo (art. 75 inc. 12) como de proveer lo conducente al desarrollo del país (art. 75, inc. 19).

La evaluación del interés público constituye uno de los requisitos ineludibles a los fines de decidir la suspensión de los efectos de una ley, según establece el inciso d) del artículo 13 de la Ley N° 26.854.

En el caso que nos ocupa, el interés público se ve afectado por la concesión de una medida cautelar que trae aparejadas consecuencias de imposible reparación ulterior porque implica que la actualización del marco laboral realizada por el Poder Legislativo se vea impedida. La medida cautelar decretada importa la suspensión de una ley dictada por el Honorable Congreso de la Nación en uso de las facultades conferidas por la Constitución Nacional, y en detrimento de políticas públicas direccionadas en pos del interés general.

Por demás, el dictado de una medida cautelar que suspenda con carácter *erga omnes* (en última instancia la medida pretende suspender respecto de todos los trabajadores del país) una ley del Congreso, es un acto que subvierte el régimen republicano de gobierno con una gravedad institucional absoluta, que pone en riesgo a todas las leyes de la república de no revertirse de forma inmediata (Fallos: 333:1023, citado ut supra). Cabe recordar que una facultad semejante no se le reconoce a ningún Juez de la república y es absolutamente contraria al artículo 116 de la Constitución, lo que implica una afectación directa del interés público. **En palabras de la Corte Suprema, aquello implica un camino hacia una anarquía que pone en peligro la vigencia de todas las leyes (Fallos: 333:1023).**

Una resolución semejante implica admitir que cualquier otro Juez (y, valga en el caso un juez local de la Ciudad) se encuentre facultado para suspender cualquier otra Ley con carácter nacional. Es decir, otro Juez puede considerar inconstitucional toda la Ley de Contrato de Trabajo, otro la de Asociaciones Sindicales, otro la creación del propio fuero del Trabajo, el Código Civil y Comercial, o cualquier otra ley del Congreso. En igual orden, mientras que uno declara inconstitucional, otro declara constitucional y el sistema cae en la más absoluta anarquía e inseguridad jurídica.

El interés público es la medida y el límite con que las medidas cautelares han

de ser decretadas, dado que aquel debe prevalecer siempre. Ello así, por cuanto en los procesos contencioso administrativos, a los requisitos ordinariamente exigibles para la admisión de toda medida cautelar debe agregarse la ineludible consideración del interés público (Fallos: 307:2267 y 314:1202).

Para ello, deberá observarse si su dictado resulta "menos dañoso para la comunidad que su rechazo. El *a quo* decreta la suspensión de los efectos de una norma de rango legal, la cual fue dictada por el Poder Legislativo dentro de sus facultades constitucionales y a fin de resguardar el interés público, identificado este último con la satisfacción de diversas necesidades económicas y sociales, que se traducen en mejorar el estancamiento crónico del empleo formal y revertir los factores que limitan la generación de empleo conforme fuera explicitado en el mensaje de elevación del proyecto de la Ley N° 27.802 (MEN-2025-35-APN-PTE). Conforme fuera expuesto, el interés en vilo es el crecimiento económico, la generación de nuevos y mejores empleos, para el desarrollo económico nacional. A lo expuesto hasta aquí se añade que la medida cautelar decretada torna ineficaz todo el objetivo que se dispuso mediante el dictado de la norma bajo análisis.

Además, el alcance de la medida y su dictado afectan el interés general al subvertir el orden republicano y poner en crisis las instituciones básicas del país.

Por lo expuesto, se solicita se revoque la medida cautelar decretada en autos, toda vez que antepone intereses particulares por sobre los intereses de todos los argentinos. Con costas.

3.5.4. COROLARIO

Para la procedencia de una medida cautelar como la de la especie deben verificarse determinados presupuestos procesales genéricos: verosimilitud en el derecho (y en la ilegitimidad) y peligro en la demora.

Respecto al primero, no ha sido acreditado siquiera sumariamente.

Con relación al peligro en la demora, se requiere la existencia de un temor fundado de que el derecho invocado se pierda o sufra un menoscabo durante el trámite del proceso por el transcurso del tiempo sin que ese daño pueda ser reparado posteriormente, extremo que tampoco se encuentra verificado.

En el sentido interpretado, tiene dicho y reiterado la jurisprudencia federal que

resulta insuficiente la sola manifestación de la parte o la promoción de una demanda para que automáticamente sean concedidas medidas cautelares, si no se demuestra la verosimilitud o razonabilidad de la pretensión a través de elementos “*prima facie*” acreditativos (CFMDP, Expte. Nro. 9710; “Incidente de Medida Cautelar incoado por Ioma en autos Instituto Nacional De Rehabilitación Psicofísica Del Sur C/ Ioma S/ Cobro De Pesos Ordinario” Registro: 13.743 – 14/II/08, entre otros de igual tenor).

Finalmente, cabe recordar que la Ley N° 26.854 establece que los requisitos dispuestos en el artículo 13 deben verificarse conjuntamente: “1. (...) *podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos...*”.

Así lo ha afirmado la jurisprudencia del fuero: “*Asimismo, y tal como lo dijo la magistrada de la instancia anterior, debe remarcarse que su admisibilidad se encuentra condicionada a que se demuestre la existencia de específicos recaudos, que pueden subsumirse en la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, a los que suma aquí, por cuestionarse actos administrativos, el presupuesto de no afectación al interés público (ley de medidas cautelares, 26.854, Fallos 307:2267 y 314:1202). Requisitos que, además, revisten autonomía, debiendo simultáneamente concurrir (esta sala, causas “Ruiz Darío”; “Egssa Holding SA”, “Lanusse Lucas”, y “Cetera, Gonzalo c/ EN AFIP”, pronunciamientos del 15 de noviembre de 2011, del 1 de febrero de 2014, del 28 de agosto de 2018 y, del 19 de septiembre de 2019, entre otras)” (CNCAF, Sala I, Expte. 48945/2018, “Incidente N° 1 - ACTOR: MANIK.COM SA. DEMANDADO: EN-M PRODUCCION s/Inc. Medida Cautelar”, 09/03/2020).*

En este marco, cuadra señalar que la norma cuya aplicación se suspende ha sido dictada por el Congreso de la Nación en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional, en el marco del sistema representativo, republicano y federal de gobierno.

En consecuencia, el control judicial de constitucionalidad debe ejercerse con carácter restrictivo y como última ratio, evitando sustituir indebidamente las decisiones de política legislativa adoptadas por los órganos constitucionalmente competentes.

En el caso, la resolución recurrida avanza sobre ese ámbito propio de los otros

poderes del Estado, al suspender con efectos generales una norma legal sin que se encuentren configurados los presupuestos que habilitan una medida de tal gravedad institucional, lo que importa una indebida injerencia en el ejercicio de competencias propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, excediendo los límites del control jurisdiccional. **Además, en el caso, el Juez se extralimita, adjudicándose una facultad que ningún Juez de la república posee: declarar la suspensión con alcance general de una norma dictada por el Congreso. Ello lleva a una gravedad institucional que debe ser remediada de forma urgente por la Cámara.**

Por todo ello, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la resolución apelada en todos sus términos, lo que aquí se peticiona a V.E.

3.6. SEXTO AGRAVIO: IDENTIDAD DE OBJETO ENTRE LA MEDIDA CAUTELAR Y LA CUESTIÓN DE FONDO. ADELANTO DE JURISDICCIÓN Y VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

Causa agravio a los intereses de mi representada que el *a quo* desatienda en forma deliberada la letra y espíritu de la Ley N° 26.854 y, en consecuencia, dicte la medida cautelar que aquí se recurre en franca violación al principio de congruencia. Tal como V.E. puede observar, la pretensión cautelar de la actora radica en que se suspenda la aplicación de numerosos artículos de la Ley N° 27.802.

Conforme lo previsto en el art. 3 de la mencionada norma, cuyo texto se transcribe a continuación, las medidas cautelares no pueden coincidir con el objeto de la pretensión de fondo articulado en la demanda.

“Artículo 3° - Idoneidad del objeto con la pretensión cautelar (...) Las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal”.

La medida decretada en autos posee exactamente el mismo objeto que el esgrimido en la acción incoada por la actora. Esta coincidencia la enfrenta con la inveterada jurisprudencia del Máximo Tribunal que impide la procedencia de medidas cautelares cuando éstas coinciden en sustancia con la pretensión de fondo, por resultar un adelantamiento de la resolución final de la causa: *“Que en tales condiciones, ponderando por un lado el señalado criterio interpretativo que deriva de la presunción de legitimidad de los actos impugnados y, por el otro, el hecho indiscutible de que, en razón de la coincidencia sustancial del objeto de la demanda*

y de la cautela, el dictado de esta última tendría los mismos efectos que la sentencia definitiva (Fallos: 327:2490, considerando 4º) corresponde concluir en su improcedencia, dado que su admisión excedería ciertamente el marco de lo hipotético, dentro del cual toda medida cautelar agota su virtualidad (Fallos: 325:388)” (Fallos: 342:645; énfasis agregado).

La medida cautelar debe ser revocada y no puede arribarse a otra conclusión sin analizarse en profundidad las normas que resultan aplicables y que se encuentran discutidas, implicando ello resolver sobre el fondo de la cuestión.

Es sabido que la procedencia de las medidas cautelares se encuentra subordinada a una estricta apreciación de los presupuestos de admisión de los que surjan acreditados *prima facie*, la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta de la norma recurrida y en cuidadoso resguardo del interés público comprometido. En el caso, el juzgador omitió deliberadamente adentrarse respecto del interés público comprometido que se encuentra en riesgo. Así, el sentenciante prescindió de indagar respecto de lo más importante que debe motivar la actividad jurisdiccional.

Se advierte claramente que la medida cautelar solicitada y decretada se confunde con el fondo de la cuestión, por lo que debe hoy ser revocada. La cuestión en trato exigía un análisis provisto de mayor cautela y rigurosidad.

En este punto, el *a quo* sostuvo que la medida cautelar tiene por objeto únicamente mantener la igualdad entre las partes y evitar situaciones irreparables hasta el dictado de la sentencia definitiva. Expresamente dijo: *"El objeto claramente no es el mismo, pues mientras en esta etapa cautelar se procura el mantenimiento de la igualdad entre las partes y evitar la concreción de situaciones jurídicas irreparables hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, en aquélla se dará certeza definitiva, reparando o conservando el status quo creado por la ley 27.802 –según se resuelva”*

Sin embargo, dicha afirmación no se condice con los efectos concretos de la medida dispuesta en autos. En efecto, la suspensión de la aplicación de una norma legal vigente no importa la conservación del “status quo”, sino su alteración sustancial, en tanto priva de efectos a una ley dictada por el Congreso de la Nación y sustituye, en los hechos, el régimen jurídico aplicable.

De este modo, la medida cautelar decretada no se limita a asegurar el

resultado del proceso, sino que anticipa sus efectos propios, configurando un supuesto de adelantamiento de jurisdicción que desnaturaliza la finalidad propia de las medidas cautelares.

La medida cautelar decretada, en claro desmedro y menoscabo de los intereses de millones de argentinos y de toda una Nación, provoca un ostensible gravamen por cuanto configura un serio atropello vulnerando lisa y llanamente al principio de la división de poderes y de los propios postulados de la Constitución Nacional, cuya tutela efectiva debe primar en todo Estado Republicano.

El Juez de primera instancia acogió la pretensión cautelar del actor y pretende arrogarse facultades del Poder Legislativo, incurriendo en:

I.- una grave violación del debido proceso legal;

II.- una preocupante transgresión de uno de los deberes de los jueces que consiste en fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia (art. 34 inc. 4 del CPCC) y;

III.- una flagrante violación al principio de división de poderes, emitiendo un pronunciamiento manifiestamente violatorio de las garantías y principios invocados y arrogándose el Juez una facultad contralegislativa general inexistente en el sistema constitucional nacional.

Resulta, por ende, contraria a derecho la sentencia cuestionada.

En efecto, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación ha atribuido carácter constitucional al principio de división de poderes o zona de reserva del Poder Legislativo, como expresión de la defensa en juicio, porque obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos.

Finalmente, resultan pacíficas la jurisprudencia y la doctrina en cuanto a que ello desvirtúa el instituto cautelar comprometiendo la materia propia debatida en la causa. Nótese que constituye un exceso del derecho de defensa en juicio la medida cautelar que acarrearía idénticos efectos que la admisión de la demanda y la ejecución de la sentencia, tal como sucede en el caso de autos.

Asimismo, es pertinente recordar tal como ha expuesto la Corte Federal que cuando la medida cautelar está dirigida contra el Estado Nacional y, con mayor razón,

aquellas que tienden a suspender la aplicación de actos legislativos, es menester que se acredite *prima facie*, y sin que ello implique prejuzgamiento del fondo, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible. Y ello es así por la presunción constitucional de validez de las leyes, razón por la cual, en principio, ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante las cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina en principio la improcedencia de las medidas cautelares, como la solicitada (Fallos: 313:521 y 619, entre otros muchos).

En este entendimiento, corresponde reiterar el ya nombrado caso “Thomas” (Fallos: 333:1023), donde el Cíbero Tribunal ha expuesto que *“El modelo argentino es claramente el difuso o norteamericano en forma pura. En una acción como la precedente, ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860. Si no la tiene en la sentencia que decide el fondo de la cuestión, a fortiori menos aún puede ejercerla cautelarmente”* (énfasis agregado).

Es relevante considerar que la medida pretendida en el *sub judice* –declaración de invalidez constitucional de numerosos artículos de la LML– importa desconocer o descalificar actos emanados del Congreso de la Nación, bajo argumento de ser ilegítimos y arbitrarios, lo cual impone reflexionar sobre los principios propios de esta materia y en particular, la presunción de legalidad con que están dotadas las leyes.

Por tanto, no se verifican tales extremos si en autos debe efectuarse forzosamente un análisis mucho más exhaustivo que el que corresponde a medidas cautelares, lo cual conllevaría necesariamente adelantar opinión sobre el objeto del pleito.

3.7. SÉPTIMO AGRAVIO: EL EXCESO EN EL ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR CONFIGURA UNA SENTENCIA *ULTRA PETITA*.

Causa agravio a los intereses de mi representada que la resolución recurrida haya dispuesto una medida cautelar con un alcance que excede manifiestamente el objeto de la pretensión articulada por la actora.

En efecto, conforme surge de la propia demanda, la actora circunscribió su solicitud cautelar a la suspensión de determinados artículos de la norma cuestionada.

No obstante ello, el tribunal dispuso la suspensión de un conjunto más amplio de disposiciones, extendiendo indebidamente los efectos de la medida más allá de lo expresamente peticionado. A tales efectos, vale reiterar que la sentencia dispuso la suspensión de los artículos 3, 25, 44, 53, 55, 59 a 77, 107 y 208, cuya suspensión cautelar no fue requerida por la actora.

Tal proceder configura una clara violación del principio de congruencia, en tanto el pronunciamiento judicial debe guardar estricta correspondencia con las pretensiones deducidas por las partes, sin que resulte admisible otorgar más de lo pedido ni decidir sobre cuestiones no sometidas a consideración del tribunal.

La circunstancia señalada por el sentenciante en cuanto a que esta parte, al evacuar el informe previsto en el artículo 4 de la Ley N° 26.854, no se habría expedido respecto de la totalidad de los artículos finalmente alcanzados por la cautelar, lejos de justificar la solución adoptada, pone de manifiesto el exceso en el que se ha incurrido.

Ello es así, en tanto esta parte estructuró su defensa en función del alcance concreto de la medida cautelar solicitada por la actora, no pudiendo razonablemente anticipar ni controvertir extremos que no habían sido incluidos en la pretensión.

En tales condiciones, la ampliación oficiosa del objeto de la cautelar vulnera de manera directa el derecho de defensa en juicio, al privar a esta parte de la posibilidad de expedirse sobre aspectos que no integraban el objeto litigioso al momento de producir el informe correspondiente.

Asimismo, la decisión adoptada importa un indebido apartamiento del marco fijado por las partes, configurando un supuesto de sentencia *ultra petita*, vedado por nuestro ordenamiento procesal.

Cabe recordar que, con mayor razón en materia cautelar, el juez debe ceñirse estrictamente al objeto de la pretensión, evitando extender sus efectos más allá de lo solicitado.

El propio razonamiento del tribunal evidencia la incongruencia de la decisión, ya que reconoce que determinados extremos no fueron objeto de debate y, sin embargo, extiende sobre ellos los efectos de la medida cautelar.

Por lo tanto, la medida cautelar dictada resulta inválida en cuanto excede el alcance de la pretensión articulada, debiendo ser dejada sin efecto en ese aspecto, lo que así se solicita declare V.E., con costas.

3.8. OCTAVO AGRAVIO: LA INDEBIDA APLICACIÓN DE LA LEY N° 26.854 AL EXIMIR DE CONTRACAUTELA A LA ACTORA SIN LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN.

Que, en este aspecto, causa agravio a los intereses de mi mandante que el sentenciante hay considerado suficiente la cautela juratoria ofrecida por la actora, fundándose para ello en el artículo 10 apartado 2 de la Ley N° 26.854.

Para así decidir, el magistrado sostuvo: *“En esta causa se discuten sobre derechos vinculados a este concepto y a la dignidad de las personas, que buscan en su trabajo la forma de sostener su vida y la de su familia. Están íntimamente vinculados los derechos humanos de las personas del mundo del trabajo, por lo que considero suficiente la caución juratoria emitida por la parte actora (art. 10, apartado 2, ley 26.854).”*

En la pretensión de autos no se encuentran configurados los requisitos del artículo 2. inciso 2 de la Ley N° 26.854 . En tal entendimiento el *a quo* sostiene que la medida cautelar peticionada por su esencia provisional no causa estado y no afecta recursos del Estado Nacional, pero intencionalmente suspende una ley emanada del Congreso Nacional dictada en ejercicio de sus facultades. Sin embargo, sí encuentra motivo de “peligro” para la actora y sus representados cuando suspende en gran parte su articulado.

Ahora bien, a poco que se analice el cuestionamiento que efectúa la actora, se advierten las inconsistencias en las que incurre y el juzgador otorga una medida cautelar sin que se configure o vaya a configurarse lesión a derecho subjetivo alguno de la accionante.

En ningún momento la norma en crisis perturba o afecta los vínculos laborales entre los dueños de la fuerza de trabajo y los dueños del capital.

Tampoco la Ley desconoce la actividad y gestión de las entidades sindicales a la luz de las garantías constitucionales.

Contrariamente a ello, la Ley viene a liberar con sus modificaciones las ataduras en las que se hallan inmersos los derechos civiles y sociales de todos los argentinos, las que sí atentan contra los postulados de los artículos 14 y 14 bis de la Carta Magna.

La Ley promueve una integral protección del trabajo con normas que abogan por fomentar y aumentar el empleo, así como también antepone la voluntad del trabajador por sobre la voluntad de sus representantes, sin que ello de forma alguna implique el desconocimiento de la gestión sindical en pos de la negociación colectiva con el sector empleador.

No se comprende de qué forma se encuentran afectados los derechos alimentarios de los trabajadores con la vigencia de la Ley, para que sea procedente encuadrar la medida cautelar dictada en los términos del artículo 2 inciso 2 de Ley N° 26.854.

Con la LML los derechos de los trabajadores se encuentran enaltecidos y dignificados por la promoción e impulso que lleva adelante, para alcanzar el pleno empleo.

Por lo tanto, mal pueden considerarse configurados en el caso los presupuestos fácticos contenidos en el artículo 2 inciso 2 de la Ley N° 26.854.

Como puede observarse, la ley no lesiona ningún derecho que le asista a la actora y menos aún ningún derecho de los enunciados taxativamente en el artículo 2 inciso 2 de la Ley N° 26.854. Se mantienen inalterados e incólumes los derechos constitucionales civiles y sociales consagrados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.

Por ende, amparándose en dichos fundamentos el juzgador pasa por alto lo dispuesto en el art. 10 de la Ley N° 26.854 inciso 1 y admite la caución juratoria en base, otra vez, a ningún fundamento jurídico válido.

En prieta síntesis, no solo no hay vulnerabilidad sino que la sentencia no contiene desarrollo alguno que permita subsumir el caso en los supuestos del artículo 2 inciso 2 de la Ley N° 26.854.

En mérito a todo lo aquí desarrollado, peticionamos al buen criterio de V.E. tener a bien acoger el recurso aquí impetrado y revocar en todas sus partes la medida cautelar objeto de recurso, con expresa imposición de costas.

-IV-

MANTIENE CUESTIÓN FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto en que V.E. rechace los planteos efectuados en el presente, mantenemos la cuestión federal, con la expresa reserva de ocurrir oportunamente ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo previsto por el art. 14 de la Ley N° 48, por cuanto la materia tratada en autos pone en juego la inteligencia de normas de naturaleza federal y facultades propias de los poderes instituidos, artículos 1°, 14, 14 bis, 16, 18, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 12 y 19, y 116. A su vez, se encuentran en tela de juicio normas federales como la Ley N° 26.854, la Ley N° 27.802, la Ley N° 27 y la Acordada CSJN N° 12/16.

En otro orden, de prosperar la presente petición cautelar, se configuraría un caso de gravedad institucional según lo preceptuado en el precedente “Thomas” (Fallos: 333:1023), razón por la cual, se mantiene la cuestión federal también en relación a ello. Al respecto cabe dejar sentado que la peculiar relevancia de las cuestiones involucradas en los presentes actuados, excede el interés particular de las partes, configurando como se mencionó un supuesto de gravedad institucional, por cuanto se encuentran en juego el principio de división de poderes en su raíz más profunda, al estar dejándose sin efecto una ley emanada del Congreso de la Nación *erga omnes*.

Finalmente, también cabe aplicar la doctrina de la arbitrariedad desarrollada por la CSJN en cuanto tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente –calidad que la sentencia cautelar claramente no ostenta– con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa (Fallos: 341:84; 347:414; y 346:1212; entre otros). El Máximo Tribunal ha dicho que la doctrina de la arbitrariedad exige que las decisiones judiciales consideren todas las cuestiones planteadas que sean pertinentes y relevantes para la adecuada solución del litigio (Fallos: 330:4459; 344: 983 y 346:37).

Por lo expuesto, atendiendo a las consideraciones del caso, dejamos planteada la arbitrariedad de la sentencia a los fines de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por verse vulnerada la garantía del debido proceso, la tutela judicial efectiva, traducéndose en una afectación de los derechos de propiedad, igualdad ante la ley y defensa en juicio.

-V-

PETITORIO

En mérito a lo desarrollado en las líneas que anteceden, solicitamos:

1. Se tenga por interpuesto y fundado el recurso de apelación deducido contra la resolución dictada en autos en fecha 30/03/2026 por cuanto decretó la medida cautelar peticionada por la actora.
2. Se tenga presente la manifestación preliminar respecto de la implicancia de la decisión dictada de oficio el 06/04/2026 respecto de la aquí impugnada.
3. Se conceda la apelación precedente con efecto suspensivo.
4. Se eleven los autos al Superior en la forma de estilo.
5. Se tenga por mantenida la cuestión federal.
6. Oportunamente, de la Excma. Cámara de Apelaciones, solicitamos se haga lugar al recurso impetrado y se revoque la cautela dictada en todos sus términos, con costas.

Proveer de conformidad que,

SERÁ JUSTICIA.



Abog. Sebastián J. AMERIO
Procurador del Tesoro de la Nación



Mag. Santiago M. CASTRO VIDELA
Subprocurador del Tesoro de la Nación



Dr. Julio Pablo COMADIRA
Subprocurador del Tesoro de la Nación